mas sociales y económicos que competen a los Poderes Legislativo y Ejecutivo a nivel federal y estatal.

En 1930, se expide la Ley sobre Planificación General de la República, con el objeto de coordinar y encauzar las actividades de las distintas dependencias para lograr el desarrollo del país, en forma ordenada y armónica, "de acuerdo con su topografía, su clima, su historia y tradición, su vida funcional, social y económica, la defensa nacional, la salubridad pública y las necesidades presentes y futuras". Como resultado de su aplicación, se creó la Comisión de Programa, misma que se encargaría de llevar a cabo los estudios y trabajos establecidos en el ordenamiento jurídico.

En 1933, dentro del proceso democrático para la renovación de los poderes federales, el Partido Nacional Revolucionario invitó a sus miembros a elaborar un Plan Sexenal. Este documento contiene los puntos esenciales para la acción gubernamental orientada a resolver las dificultades internas que limitaban el acceso de las grandes mayorías a los beneficios del desarrollo y obstaculizaban la independencia económica del país.

El Comité Asesor Especial, organismo consultivo de carácter intersecretarial, fue encargado de auxiliar a las dependencias para traducir los lineamientos del Plan Sexenal en acciones efectivas.

Ese Comité fue transformado más tarde en una oficina técnica de la Secretaría de Gobernación y tuvo a su cuidado la elaboración del Segundo Plan Sexenal, para el período 1941-1946. El Plan examina las bases de la planeación específica para las dependencias del sector público y procura una mayor coordinación entre ellas. Asimismo, cuantifica los objetivos primordiales del Gobierno que era posible alcanzar en 1946 y deja a cargo del C. Presidente de la República su aplicación específica.

En 1942, se constituyó la Comisión Federal de Planeación Económica, para mejorar la información estadística, y se creó el Consejo Mixto de Economía Regional, cuyo objeto era la realización de estudios estatales para una apreciación más definida e integral de la economía del país.

Durante la campaña electoral para elegir Presidente de la República para el período de 1946-1952, funcionaron los Consejos de Planeación Económica y

Social y se llevaron a cabo varias mesas redondas con la participación de juntas populares en las que se analizaron problemas diversos.

Durante estos años se estimuló la programación del gasto público, sobre todo en materia de inversiones, propósito que explica el establecimiento de la Comisión Nacional de Inversiones, que controlaría y supervisaría los presupuestos, mediante auditorías e inspecciones técnicas.

Destaca el proyecto de Plan de Inversiones del Gobierno Federal y sus Dependencias Descentralizadas, elaborado por el Banco de México para los años 1947 a 1952.

Al iniciarse la década de los cincuentas, Nacional Financiera recibe el encargo de formular un diagnóstico y un balance de las inversiones públicas, que dio por resultado un estudio intitulado, "El desarrollo económico de México y su capacidad para absorber capital del exterior". Este trabajo constituye el primer esfuerzo tendiente a cuantificar y explicar la dinámica de las inversiones públicas de 1925 a 1950.

Posteriormente se encomendó a la propia Nacional Financiera la realización de un trabajo que fue intitulado "Consideraciones para un Programa Nacional de Inversiones", que cubre el período 1953-1960. Enfatiza ese documento la importancia de lograr el control, la organización y jerarquización de las inversiones. Estos principios fueron acogidos favorablemente y ejercieron una influencia considerable para la formación del Comité de Inversiones.

El Comité, que funcionaría bajo la supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y Nacional Financiera, tuvo como objeto central formular y presentar un programa coordinado de inversiones públicas.

Para la mayor efectividad de su trabajo, el Comité fue adscrito a la Presidencia de la República para constituir más tarde, en 1954, la Comisión de Inversiones. Desde esa fecha, todas las Secretarías y Departamentos de Estado, organismos descentralizados y empresas de participación estatal, quedaron obligados a presentar sus programas de trabajo a dicha Comisión, para que fuesen a su vez aprobados por el C. Presidente de la República.

Con el funcionamiento de la Comisión fue posible incrementar la coordinación de las inversiones públicas, realizar análisis sobre las mismas, evaluar proyectos y programas de distintas actividades y, en general, mejorar la colaboración entre las distintas entidades estatales y paraestatales.

A fines de 1958, al reformarse la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, se crea la Secretaría de la Presidencia. Esta dependencia quedó encargada de recabar los datos para elaborar el plan general de inversiones del Poder Ejecutivo Federal, elaborar los programas especiales que fije el Presidente de la República; planear obras, sistemas y el aprovechamiento de los mismos; proyectar el fomento y desarrollo de regiones y localidades; coordinar los programas de inversión de los diversos órganos de la administración pública; y planear y vigilar la inversión de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal.

Expedida la nueva ley, la Comisión de Inversiones pasó a formar parte de la Secretaría de la Presidencia, con el carácter de Dirección General de Inversiones Públicas.

El 29 de junio de 1959, se expide el Acuerdo que dispone que las entidades del sector público elaboren su programa de inversiones para 1960-1964. Este acuerdo fija los criterios que rigen la programación de las inversiones y las modalidades que conviene observar en la preparación de los programas.

En julio de 1961, se dicta el Acuerdo sobre la Planeación del Desarrollo Económico y Social del País; y poco más tarde, en marzo de 1962, el Acuerdo que crea una Comisión Intersecretarial integrada por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Presidencia a la que se encarga la formulación de planes para el desarrollo económico y social del país, a corto y largo plazo.

Como efecto de la difícil situación económica internacional prevaleciente a principios del pasado decenio, se encomendó a esta Comisión Intersecretarial elaborar el Plan de Acción Inmediata 1962-1964.

La propia Comisión realiza, poco más tarde, un nuevo ensayo de planeación general: el Programa de Desarrollo Económico y Social de México, 1966-1970.

Para hacer efectivo este Programa era preciso reforzar los mecanismos de programación de corto plazo, sobre todo los que se ocupaban de las inversiones públicas, cuya programación y autorización seguía teniendo deficiencias.

Así, las autorizaciones eran parciales, esto es, no comprendían todos los proyectos y programas de las entidades del sector público, a pesar de lo establecido en el Acuerdo del 29 de junio de 1959. Igualmente, las autorizaciones para el ejercicio de las inversiones no tenían caducidad. Ello permitía que las distintas dependencias del gobierno, los organismos y las empresas públicas, acumularan el máximo de autorizaciones para realizarlas conforme a múltiples factores, no siempre económicos; y también daban paso a que se presionara, a veces en forma desmedida, sobre los recursos disponibles.

La falta de coordinación entre la inversión y el gasto corriente generaba que muchas obras realizadas no contaran con recursos para su operación. Desde luego, al no restringirse a un año el ejercicio de las inversiones se impedía una asignación óptima de los recursos financieros, se ocasionaba la recurrencia a fuentes de crédito no siempre sanas y se obstaculizaba el control y la medición de sus resultados.

Para superar algunas de estas fallas se estableció como órgano dependiente de la Comisión Intersecretarial la Subcomisión de inversión-financiamiento.

La Subcomisión tiene a su cargo: anualizar el ejercicio de las inversiones públicas; examinar en forma simultánea los proyectos y programas con su financiamiento, asegurándose que cada inversión por aprobar esté debidamente respaldada con los recursos necesarios y más convenientes para su ejecución, dentro del manejo de la política financiera del país; mantener un diálogo permanente entre los responsables de cada campo particular de actividad del sector responsable de cada campo particular de actividad del sector público; facilitar la coherencia entre los programas de los distintos sectores y lograr una secuencia más adecuada en la realización de los programas, para multiplicar los beneficios del gasto.

En el curso de la presente administración se han fortalecido los instrumentos de planeación preexistentes y se han creado otros nuevos conforme a una

estrategia de programación participativa que ha mejorado considerablemente las previsiones y los trabajos de cada organismo y de la administración pública en su conjunto.

Al principio del actual Gobierno, se determinó el establecimiento de Unidades de Programación en todas las entidades administrativas del Sector Público Federal. Este núcleo coordina el proceso interno de cada entidad para la toma de decisiones y configura el programa de acción respectivo; comprendiendo los gastos de operación o corrientes y las inversiones.

Al encomendarse a la Secretaría de la Presidencia la coordinación de los trabajos de estas unidades se estableció un nexo directo entre la unidad de programación de cada entidad y la unidad central de programación que favoreció el establecimiento de grupos de análisis y comisiones coordinadoras para una programación sectorial más eficiente.

Entre estos grupos, pueden señalarse, la Comisión Nacional Coordinadora del Sector Agropecuario, la Comisión Coordinadora del Transporte, la Comisión Coordinadora de la Política Industrial del Sector Público, el Grupo de Análisis del Sector Educativo, el Grupo de Análisis del Sector Salud, la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, la Comisión Nacional de Energéticos y la Comisión Nacional de la Industria Siderúrgica.

Los análisis globales que se realizan en el seno de estos mecanismos rebasan obviamente el marco simple de la programación de la inversión para ocuparse además de estudiar problemas operativos, campos redundantes de acción, áreas no atendidas y otros aspectos en que se pone de relieve la conveniencia de ampliar los grupos de trabajo y fortalecer los existentes.

Así surgió, por ejemplo, la necesidad de ampliar el mecanismo de la Subcomisión de inversión-financiamiento, con la participación de la Secretaría del Patrimonio Nacional, a fin de lograr la aportación de mayores elementos de juicio para la toma de decisiones.

A través de los Comités Promotores del Desarrollo Socio Económico de los Estados, que se han creado en todas las Entidades del país, la planeación participativa se ha extendido a cada una de ellas, dentro del más riguroso respeto a nuestro sistema federal. En el

seno de estos organismos se coordinan a nivel local los criterios de las diferentes dependencias federales y de las estatales y municipales para producir óptimos resultados. Asimismo, se recoge la opinión de los campesinos, obreros, industriales, comerciantes, profesionales, estudiantes y de todos los demás sectores activos de la población, para integrar proposiciones de inversión pública federal que refleje fielmente los principales intereses y necesidades de la población.

Dentro de estos comités la coordinación se establece no únicamente entre los funcionarios de nivel superior con capacidad de decisión, sino también entre aquellos encargados de elaborar los estudios y de ejecutar los trabajos y, asimismo, se logra una adecuada jerarquización de metas que toma en cuenta, tanto los criterios técnicos, como la urgencia manifiesta de las demandas populares.

Para enmarcar los trabajos de estos mecanismos dentro de una estrategia general coherente, fue creada la Comisión Nacional de Desarrollo Regional.

Por su parte, el adelanto en los trabajos de la Comisión de Estudios del Territorio Nacional, permite a las dependencias federales y a los gobiernos locales contar con una información precisa y uniforme acerca de los recursos físicos del país.

Todo lo anterior permite afirmar que el país cuenta hoy con la suficiente experiencia e infraestructura en materia de programación para dar un paso más hacia adelante en esta materia, mediante la creación de un sistema de planeación nacional que integre en un solo esquema a todos los instrumentos de coordinación ya existentes y les permita funcionar eficazmente dentro de una estrategia común.

Es necesario y posible dar una mayor coherencia a los trabajos de todos los organismos públicos y a todos los mecanismos de coordinación ya implantados. El sistema que se propone en esta iniciativa no está encaminado a sustituir a ninguno de los existentes, sino únicamente a compatibilizar sus metas y coordinar mejor sus acciones.

En ausencia de un sistema integral de planeación, los funcionarios y los particulares se ven obligados a actuar en el corto plazo mediante la resolución de asuntos que por su urgencia no admiten retraso de ninguna especie. Pero al resolverse los problemas y las

necesidades inmediatas, se generan efectos que en el mediano y largo plazo pueden producir problemas mucho mayores.

En la presente iniciativa no se busca reducir la capacidad de decisión de ningún organismo público, sino por el contrario, dotar a cada uno de ellos de suficientes elementos, conforme a un criterio integral, para la mejor toma de decisiones en el área específica que a cada uno de ellos está encomendada.

El sistema propuesto consiste en la integración de un Consejo Nacional de Planeación Económica y Social, en el que lejos de conferirse la delicada tarea de la planeación a un reducido grupo de técnicos, se hace participar a todas las entidades de la administración pública federal, sin excepción.

Los planes no serán concebidos al margen de las dependencias y entregados a éstas para su ejecución, sino que serán elaborados con el concurso de todas y ejecutados por ellas mismas. Esto es así, porque para asegurar la realización práctica de los programas de desarrollo socioeconómico es imprescindible que las instituciones encargadas de su ejecución participen oportunamente en su diseño. Lo contrario conduciría a la elaboración de esquemas teóricos o de simples catálogos de necesidades, que correrían el riesgo de ser ignorados a la hora de las decisiones.

Además, se hace participar a todos los organismos públicos porque en nuestra época el planeamiento y solución de los problemas requiere, más que nunca, un enfoque interdisciplinario, ya que si bien nadie tiene el monopolio de la verdad, todos poseen parte de ella. Asimismo se requiere el concurso de todas las dependencias porque para la toma de decisiones es indispensable que los funcionarios tengan conocimiento oportuno y preciso de las consecuencias que sus resoluciones pueden tener en otras áreas no encomendadas a ellos.

Por otra parte, se dispone la participación integral de la administración pública federal porque cualquier excepción transportaría consigo el riesgo de deformar el trabajo conjunto de todos los demás organismos públicos y porque sólo así los planes pueden ser verdaderamente obligatorios para ellos.

El hecho de que la programación elaborada conforme a este instrumento jurídico sea obligatoria para todas las entidades que componen el sector público federal, no quiere decir que ésta sea inflexible, puesto que se reserva al Presidente de la República la facultad de modificar los planes, incluso después de aprobados, en virtud de que hechos supervenientes, ocurridos dentro y fuera del territorio nacional, exigen un razonable grado de flexibilidad.

Por lo que hace a los sectores sociales y privados, los programas y planes no serán obligatorios, sino meramente indicativos. Sin embargo, debe destacarse que estos sectores, al conocer con anticipación las proyecciones económicas del sector público, podrán definir con mayor certidumbre sus propias prioridades y proyectos, con el consecuente incremento en la eficacia del aparato productivo nacional en su integridad. Además, el Gobierno dispone de instrumentos para orientar y estimular los ángulos positivos del interés individual sin menoscabo del interés social.

Asimismo, los planes federales —que no pueden ser obligatorios para los gobiernos estatales y municipales— permitirán a éstos contar también con mayores elementos para elaborar sus propios programas y que éstos se coordinen más adecuadamente con las acciones del Gobierno Federal. La economía de esfuerzos que ello representa habrá de reportar sustanciales beneficios a la Nación en su conjunto.

La iniciativa es congruente con el elevado interés de fortalecer el federalismo como sistema de gobierno, ya que permite, a través del Comité de Desarrollo Regional y Urbano, descentralizar la formulación de planes para traducirlos en esquemas realistas de necesidades y objetivos de carácter estatal, que se integren, a su vez, en una estrategia de alcance nacional. Por esta razón, se prevé la invitación a los CC. Gobernadores para participar en los trabajos del Consejo Nacional de Planeación Económica y Social.

El Comité de Desarrollo Regional y Urbano recogerá en el interior de la República, a través de los mecanismos ya existentes, los puntos de vista de los funcionarios federales que trabajan en la provincia, así como de las autoridades locales y municipales y de los ciudadanos en general, a efecto de que los intereses y necesidades de cada sector de la actividad nacional, se

vean oportunamente reflejados en la definición de las prioridades nacionales.

Esto permitirá, asimismo, que en cada Entidad federativa se realicen mayores esfuerzos para jerarquizar las demandas y coordinar las acciones en cada localidad, y en cada centro de trabajo y de estudios.

Las opiniones generadas en este Comité han de ser tomadas en cuenta oportunamente por los Comités sectoriales, a efecto de que el gasto público federal se resuelva habiendo tenido a la vista, con toda oportunidad, las demandas más apremiantes de todas las localidades del país.

Los Comités sectoriales se crean en atención a los intereses primordiales del país.

En las sesiones de los comités y de los subcomités se establece la posibilidad de recabar oportunamente los puntos de vista de las organizaciones de campesinos, trabajadores, empresarios y de todas las demás representativas de los sectores sociales y económicos del país. En virtud de que para estos sectores la programación resultante no será obligatoria, su participación en el Consejo tampoco es imperativa, sino que estará sujeta a la invitación que se les haga para tratar los asuntos de mayor interés.

Dispone esta iniciativa el mínimo de formalidades administrativas para hacer que el sistema funcione con puntualidad y para lograr que la definición de las metas nacionales se resuelva de la manera más institucional. Por ello se dispone que la designación de los integrantes de los comités sectoriales sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y que de igual manera se publiquen los planes y programas elaborados por el Consejo. Asimismo, se prevé un calendario de actividades para el Consejo que habrá de definirse en forma reglamentaria.

Para evitar que cualquier género de decisiones personales dificulte el buen desempeño de las tareas a cargo del Consejo Nacional de Planeación Económica y Social, no se dispone que los comités, ni los subcomités, funcionen bajo la presidencia de algunos de sus integrantes. La continuidad de los trabajos, el levantamiento de las actas de sesión y las convocatorias, quedan reservadas, conforme lo establecerá el reglamento correspondiente, a los secretarios técnicos coordina-

dores, que, por su parte, no tienen facultades decisorias, ni derecho a voto.

La vinculación directa de cada Comité Sectorial con el Consejo Nacional de Planeación y la estrecha relación de trabajo entre los Secretarios Técnicos con el Coordinador del Consejo y, a través de éste con la Comisión Central de Planeación, garantizan la unidad y coherencia entre los diferentes planes sectoriales.

Sería ilusorio suponer que únicamente a base de presupuestos anuales pueda llegarse a definir una conveniente planeación nacional. Pero será igualmente irreal sujetarse a planes de mediano y largo plazo sin determinar criterios conforme a los cuales deba definirse cada presupuesto. Por ello, se crea al mismo tiempo la obligación de producir programas anuales y la posibilidad de estructurar, según convenga, planes de un plazo mayor; sin que para ello se establezca una periodicidad obligatoria, pues ésta dependerá de las circunstancias específicas.

La planeación nacional no puede resolverse en la etapa final de aprobación de inversiones y de gasto correspondiente. En primer término, porque en muchos aspectos la planeación excede el marco de estos instrumentos; y, en segundo lugar, porque en esta etapa final, se pueden corregir algunas deficiencias de origen, pero no todas. Incluso en muchos casos resulta difícil demostrar que los gastos solicitados por las dependencias, no responden a las verdaderas urgencias del país. Por ello, es necesario mejorar la programación desde su etapa inicial y a lo largo de todo el proceso y lograr que la información y los propósitos de cada uno de los organismos públicos se hallen compatibilizados, desde su origen conforme a un criterio común.

Al romperse el aislamiento que en ciertos casos aún caracteriza las acciones de las entidades públicas, podrán evitarse la duplicación y aún la contradicción entre los distintos organismos. Esto constituye uno de los propósitos fundamentales de la reforma administrativa.

El Consejo Nacional de Planeación Económica y Social no está facultado, en forma alguna, para tomar decisiones. Estas quedan reservadas a las autoridades competentes y, por lo mismo, a la decisión superior del Ejecutivo Federal.

La función del Consejo, como ha quedado dicho, consiste únicamente en coordinar, en hacer acopio de la información generada en cada entidad administrativa y distribuirla entre todas ellas para definir conjuntamente las prioridades que permitan a esas mismas dependencias mejorar sus propios criterios para resolver los asuntos a su cargo.

Por esta causa, la iniciativa no previene la desaparición de ningún organismo público existente, ni siquiera la de aquellos integrados en forma colegiada, en todo lo que se refiere a materias ejecutivas, pero si se dispone, en cambio, que unos y otros, para efectos de planeación, colaboren dentro del sistema del Consejo Nacional de Planeación Económica y Social.

Por la misma razón, de ninguna manera se podrá considerar que el Consejo impondrá sus criterios a las dependencias, pues estos criterios no serán sino los que ellas mismas aporten, únicamente que definidos con el concurso de todas y conforme a normas que compatibilicen sus opiniones, metas y acciones en atención a las indicaciones superiores del C. Presidente de la República.

Se establece así, porque la planeación no es una tarea exclusivamente técnica, sino fundamentalmente política. Efectivamente, o se definen cuáles son las prioridades nacionales a la luz de las verdaderas necesidades del país, o se es arrastrado por la anarquía y, lo que es peor, por la planeación económica de las grandes potencias mundiales y la de las grandes corporaciones transnacionales, que mediante múltiples instrumentos de penetración y de dominación condicionan el comportamiento de la economía mundial y colonizan, a la postre, las estructuras mentales de los pueblos.

Una adecuada programación hará posible, además, que el cambio de los hombres en los cargos públicos altere todavía en menor medida la marcha general del país. El relevo institucional de la representación política podrá determinar, sin duda, cambios en el énfasis o en el ritmo de la marcha, pero esto será resultado, como es deseable, de decisiones políticas fundamentales y no debido a fallas estructurales en el sistema de planeación.

Únicamente cuando se cuenta con metas definidas puede conocerse verdaderamente el trecho que se

avanza y el grado de adelanto del país. Un programa no sólo se mide en razón de la distancia que hay respecto al punto de partida, sino también, y probablemente esto sea más importante, por la distancia que existe entre el punto de arribo y las metas propuestas.

Obviamente esta iniciativa no constituye un plan, sino la forma de conjuntar y armonizar mecanismos e instrumentos para la planeación dentro de un esquema administrativo que facilita la elaboración, discusión, evaluación y control de planes económicos y sociales. Su estructura se ajusta plenamente al modelo de economía mixta que México se ha trazado y a sus anhelos de lograr la justicia social dentro de la libertad.

El esquema propuesto no constituye un nuevo órgano burocrático, significa la culminación y enlace del proceso de reforma administrativa para la planeación y la programación, ya que unifica en el Consejo Nacional de Planeación Económica y Social a todas las entidades del sector público, y a todas las comisiones sectoriales y grupos de análisis existentes, en un organismo vertebrado para canalizar las demandas populares y el juicio técnico a través del diálogo democrático.

Además de que el Consejo no genera la creación de órganos burocráticos de carácter meramente teórico, su funcionamiento no resultará gravoso para el erario público ya que la participación de los funcionarios en él no será retribuida, por considerarse que es una obligación inherente a su cargo.

Al aprobarse este instrumento para la planeación será factible apresurar el desarrollo, distribuir más justamente sus beneficios entre individuos y entre regiones y consolidar la independencia nacional, dentro de un ambiente propicio para la igualdad de oportunidades.

Los planes y programas contribuirán, a su vez, a incrementar la productividad y la eficiencia; establecer una sana política demográfica; proporcionar ocupación permanente y productiva; fomentar y coordinar un desarrollo regional más justo; impulsar la descentralización; mejorar constantemente los niveles de bienestar social; fortalecer el mercado interno y diversificar los mercados exteriores; aumentar el ahorro interno y la firmeza de las finanzas nacionales; utilizar en mejor forma nuestros insuficientes recursos econó-

micos, acrecentar la unidad nacional y consolidar sobre bases firmes nuestra democracia social, dentro de un sistema de economía mixta, que haga posible la justicia distributiva sin menoscabo de nuestro régimen de libertades.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción I del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Constituyente Permanente, por el digno conducto de ustedes la siguiente:

INICIATIVA DE LEY GENERAL DE PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Artículo 1o. Esta Ley tiene por objeto establecer las bases generales de la planeación económica y social de todas las entidades del sector público federal, así como coordinar sus acciones con las de los gobiernos estatales y las de los sectores sociales y privados.

Artículo 2o. Los planes que se elaboren conforme a esta Ley tendrán como propósitos generales mejorar las condiciones de vida de los mexicanos; distribuir con mayor equidad el producto nacional; aumentar la capacidad económica del país; y afianzar su independencia en un régimen de libertades públicas.

Artículo 3o. Para el logro de los anteriores objetivos, se instituye el Consejo Nacional de Planeación Económica y Social.

Artículo 4o. El Consejo Nacional de Planeación Económica y Social se integra con los Secretarios y Jefes de Departamentos de Estado, así como por los titulares de todos los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria del gobierno federal y será presidido por el C. Presidente de la República. El Coordinador del Consejo será el Secretario de la Presidencia.

Artículo 5o. El Consejo Nacional de Planeación Económica y Social elaborará proyectos de programas anuales y, discrecionalmente, planes de mediano y largo plazo.

Artículo 6o. El Consejo Nacional de Planeación Económica y Social sesionará en pleno una sola vez al año, salvo en caso de convocatoria especial del C. Presidente de la República. Para su funcionamiento, se dividirá en Comités y Subcomités conforme lo establece esta Ley y se auxiliará de una Comisión Central de Planeación y de una Comisión de Gasto y Financiamiento.

Artículo 7o. Las organizaciones de campesinos, trabajadores, empresarios y las demás que sean representativas de los diferentes sectores sociales y económicos del país, podrán participar en los trabajos del Consejo Nacional de Planeación Económica y Social conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 8o. La Comisión Central de Planeación estará integrada por los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Industria y Comercio, del Patrimonio Nacional, del Trabajo y Previsión Social y de la Presidencia, quien la coordinará y tendrá la obligación de reportarle periódicamente los avances de los trabajos que realicen los Comités a que se refiere el artículo siguiente.

La Comisión tiene por objeto principal establecer la coordinación de los diversos planes de desarrollo económico y social que se generen para procurar su integración.

La Comisión de Gastos y Financiamiento estará integrada por representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público del Patrimonio Nacional y de la Presidencia. Será coordinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su función será definir o configurar los presupuestos anuales y las previsiones de largo plazo que sean necesarios para la ejecución de los planes de desarrollo económico y social.

Artículo 9o. El Consejo Nacional de Planeación Económica y Social se dividirá en los siguientes comités:

- Comité Sectorial Agropecuario
- Comité Sectorial Industrial
- Comité Sectorial de Transportes y Comunicaciones
- Comité Sectorial de Bienestar Social
- Comité Sectorial de Servicios Generales
- Comité de Desarrollo Regional y Urbano

Artículo 10. Los comités sectoriales y el regional y urbano estarán integrados por los Secretarios, Jefes de Departamentos de Estado y directores o sus equivalentes de los organismos descentralizados y empresas de la administración pública federal, que disponga el C. Presidente de la República, mediante acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 11. Los comités sectoriales, conforme a la naturaleza de las distintas materias de que se ocupen, dispondrán la creación de los subcomités que consideren necesarios y señalarán las dependencias, organismos y empresas de la administración pública federal que deban integrarlos.

Artículo 12. Los comités y los subcomités invitarán a participar en sus trabajos, a las organizaciones a que se refiere el Artículo 7o. cada vez que lo consideren conveniente.

Artículo 13. Cada comité sectorial, el de desarrollo regional y urbano y cada subcomité contará con un secretario técnico coordinador designado por la Comisión Central de Planeación. Dicho representante únicamente tendrá derecho a voz.

Artículo 14. El C. Presidente de la República invitará a los CC. Gobernadores de los Estados a que participen en los trabajos del Comité de Desarrollo Regional y Urbano.

Artículo 15. El Comité de Desarrollo Regional y Urbano únicamente producirá recomendaciones para el Consejo Nacional de Planeación Económica y Social, a través de los comités y los subcomités. Sus recomendaciones serán puestas a consideración de la Comisión Central de Planeación por el Secretario de la Presidencia para ilustrar los criterios de integración de la planeación federal.

Artículo 16. En el seno de los comités y de los subcomités sectoriales se discutirán los problemas correspondientes a su materia y cada uno de ellos elaborará un proyecto de programa en el que se especificuen las metas, las prioridades de éstas y los instrumentos para cumplirlas.

Estos proyectos contendrán también las opiniones de las organizaciones consultadas a que se refiere el Artículo 6o., que tengan mayor interés.

Artículo 17. En las fechas que determine el reglamento de esta Ley los proyectos de los subcomités se

harán llegar a los comités que corresponda, y los proyectos de éstos se remitirán a la Comisión Central de Planeación a fin de que los integre en un solo proyecto de Programa o Plan, y lo eleve por conducto de la Secretaría de la Presidencia al conocimiento del C. Presidente de la República. Este programa o plan deberá señalar las metas, las prioridades de éstas y los instrumentos necesarios para cumplirlas.

Artículo 18. El C. Presidente de la República estudiará y aprobará el Programa o Plan correspondiente, con las enmiendas que considere conveniente, y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 19. A partir de la fecha en que se haga la publicación a que se refiere el artículo anterior, las entidades del sector público federal ajustarán sus programas de gasto corriente y de inversiones a las previsiones establecidas en el programa o plan que corresponda.

Artículo 20. El mismo día en que se haga la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el C. Presidente de la República o el Secretario de la Presidencia, en su nombre, inaugurará los trabajos del Consejo Nacional de Planeación Económica y Social para el ciclo siguiente y señalará los lineamientos a seguir en sus trabajos.

Artículo 21. El Plan aprobado será obligatorio, por el plazo en él previsto, para todas las dependencias, organismos y empresas de la administración pública federal. La Comisión de Gasto y Financiamiento velará por el exacto cumplimiento de esta obligación en la elaboración de los presupuestos específicos.

Artículo 22. El C. Presidente de la República hará al Programa o al Plan las reformas que sean necesarias en su estructura y ejecución según lo demanden las necesidades del país.

Artículo 23. La Secretaría de la Presidencia proporcionará las normas mínimas y la metodología general a que deberá sujetarse la presentación de los proyectos, programas o planes.

Artículo 24. Los funcionarios públicos que participan en los trabajos del Consejo Nacional de Planeación Económica y Social en representación de las Secretarías, Departamentos de Estado, organismos

descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria del gobierno federal, lo harán en cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, por lo cual no recibirán remuneración adicional alguna.

Artículo 25. Los organismos colegiados existentes o que se creen en el futuro conservarán su estructura y funcionamiento independiente en materia ejecutiva, pero para efectos de planeación funcionarán integrados al Consejo Nacional de Planeación Económica y Social.

Artículo 26. Para efectos administrativos y presupuestales el Consejo Nacional de Planeación Económica y Social estará a cargo de la Secretaría de la Presidencia.

TRANSITORIO

Unico. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, quedando derogadas todas las disposiciones que se le opongan.

Reitero a ustedes en esta ocasión las seguridades de mi consideración distinguida.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
México, D. F., a de octubre de 1975
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL.

Presidencia de la República octubre de 1975

Artículo 1o. El primer día hábil del mes de junio de cada año, se reunirá en sesión plenaria ordinaria el Consejo Nacional de Planeación Económica y Social, a la que serán invitadas las principales organizaciones a que se refiere el artículo 7o. de la Ley.

Artículo 2o. La sesión a que se refiere el artículo anterior contendrá, cuando menos, los siguientes puntos en su orden del día:

- a) Informe sobre los avances del Programa o Plan Federal en marcha, así como sobre los logros obtenidos y obstáculos hallados en el curso del Programa o Plan Federal anterior, ya terminado.
- b) Presentación del Programa o Plan Federal correspondiente, que ese día deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
- c) Directrices del C. Presidente de la República que deberán seguirse para la elaboración del Programa o Plan Federal que corresponda.
- d) Inauguración de los trabajos.

Artículo 3o. Del primer día hábil de junio al treinta de noviembre, los subcomités prepararán sus recomendaciones y proyectos de programas subsectoriales.

Artículo 4o. El día treinta de noviembre, a más tardar, los subcomités presentarán sus conclusiones al nivel superior.

Artículo 5o. Las recomendaciones del comité y los subcomités de desarrollo regional y urbano, serán estudiadas por los comités sectoriales del primero de junio al treinta y uno de enero del siguiente año, fecha en que deberán presentarse los proyectos de programa sectorial a la Comisión Central de Planeación.

Artículo 6o. Los comités sesionarán cada quince días y los subcomités una vez a la semana, cuando menos, a invitación del coordinador técnico correspondiente.

Artículo 7o. En los trabajos del Consejo Nacional de Planeación Económica y Social las dependencias, los organismos descentralizados y las empresas de la administración pública federal, estarán representadas por sus titulares, cuyas ausencias podrán ser cubiertas por quien legalmente tenga derecho a representarlos, o por quienes hayan sido designados suplentes mediante oficio del titular correspondiente dirigido al propio Consejo. Para estos efectos, cada titular tendrá que señalar cuando menos a dos personas que indistintamente puedan representarlo en sus ausencias.

Artículo 8o. La Comisión Central de Planeación integrará el proyecto de Programa o Plan Federal, del

primero de febrero al treinta de marzo, para someterlo a la consideración del C. Presidente de la República, por conducto de la Secretaría de la Presidencia.

Artículo 9o. El C. Presidente de la República, tras de estudiar, ajustar y aprobar el Programa o Plan Federal, ordenará su publicación en la fecha prevista.

Artículo 10. Una vez cumplidos los trabajos señalados en el calendario de actividades por los diferentes organismos, éstos, deberán seguir sesionando en forma periódica, a fin de preparar el material para futuros proyectos.

Artículo 11. Las sesiones de los comités y de los subcomités serán convocadas por sus respectivos secretarios técnicos coordinadores, quienes tendrán a su cargo el levantamiento de las actas respectivas, que deberán ser firmadas por los participantes.

Artículo 12. A efecto de compatibilizar criterios, los secretarios técnicos coordinadores de los subcomités celebrarán reuniones plenarias periódicas con el secretario técnico coordinador del comité al que correspondan y, a su vez, el Coordinador del Consejo deberá efectuar reuniones plenarias con los secretarios técnicos coordinadores de los comités.

Artículo 13. Para el eficaz desempeño de sus funciones los secretarios técnicos coordinadores contarán con el personal administrativo y técnico que sea necesario.

TRANSITORIOS

Prímero. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El C. Presidente de la República señalará la fecha en que deban iniciarse los trabajos del Consejo Nacional de Planeación Económica y Social.

Reitero a ustedes en esta ocasión las seguridades de mi consideración distinguida.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
México, D.F., octubre de 1975.
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ

INICIATIVA DE LEY DE PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Presidencia de la República, diciembre de 1975

Artículo 1o. Esta Ley tiene por objeto establecer las bases generales de la planeación federal, así como coordinar sus acciones con las de los gobiernos estatales y las de los sectores sociales y privados.

Artículo 2o. Los planes que se elaboren conforme a esta Ley tendrán como propósitos generales mejorar las condiciones de vida de los mexicanos; distribuir con mayor equidad el producto nacional; aumentar la capacidad económica del país; y afianzar su independencia en un régimen de libertades públicas.

Artículo 3o. Para el logro de los anteriores objetivos, se instituye el Consejo Nacional de Planeación Económica y Social.

Artículo 4o. El Consejo Nacional de Planeación Económica y Social se integra con los CC. Secretarios, el C. Jefe del Departamento del Distrito Federal, así como por los titulares de todos los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, instituciones oficiales de crédito, fideicomisos, fondos y de los demás organismos del sector público federal y será presidido por el C. Presidente de la República. El Coordinador General del Consejo será el Secretario de la Presidencia.

Artículo 5o. Las organizaciones de campesinos, trabajadores, empresarios y las demás que sean representativas de los diferentes sectores sociales y privados del país, podrán participar en los trabajos del Consejo Nacional de Planeación Económica y Social conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 6o. El Consejo Nacional de Planeación Económica y Social, a través de los Comités y Subcomités que lo componen conforme lo establece esta Ley, formulará proyectos de planes de mediano y largo plazo así como de los programas anuales que sean convenientes para el desarrollo del país, y realizará permanentemente la evaluación de los mismos. El Consejo contará, asimismo, con una Comisión Central de Planeación.

Artículo 7o. El Consejo Nacional de Planeación Económica y Social sesionará en pleno una sola vez al año a fin de conocer las directrices que el C. Presidente de la República señale para la elaboración de los programas y planes que corresponda, las que transmitirá a los Comités y Subcomités que establece esta Ley.

El Consejo podrá reunirse extraordinariamente a convocatoria especial del C. Presidente de la República.

Artículo 8o. La Comisión Central de Planeación estará integrada por los CC. Secretarios de Hacienda y Crédito Público, del Patrimonio Nacional, de Industria y Comercio, del Trabajo y Previsión Social y de la Presidencia, quien tendrá la obligación de reportar periódicamente a la propia Comisión los avances de los trabajos que realicen los Comités a que se refiere el artículo 10o.

La Comisión contará con una Subcomisión de análisis económico y evaluación, así como con otra de gasto y financiamiento.

La Subcomisión de Análisis Económico y Evaluación, estará integrada por representantes de las cinco Secretarías que forman parte de la Comisión y tiene por objeto proporcionar la información necesaria para establecer las metas generales del desarrollo económico y social del país a corto y largo plazo, compatibilizar los diversos proyectos sectoriales y regionales que le presentan los Comités y evaluar globalmente el cumplimiento de los programas y planes aprobados por el C. Presidente de la República.

La Subcomisión de Gasto y Financiamiento, estará integrada por representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, del Patrimonio Nacional y de la Presidencia y tiene por objeto cuidar que los planes y proyectos sometidos a su consideración estén respaldados por los recursos necesarios y convenientes para su ejecución.

Artículo 9o. El Coordinador General del Consejo Nacional de Planeación Económica y Social, tendrá las siguientes atribuciones:

1. Actuar como conducto de los Secretarios técnicos entre sí y de éstos con la Comisión Central de Planeación.

2. Actuar como conducto entre la Comisión Central de Planeación y los CC. Secretarios de Estado y el C. Jefe del Departamento del Distrito Federal;
3. Actuar como secretario técnico de la Comisión Central de Planeación;
4. Solicitar en todo momento a los integrantes del Consejo, de la Comisión Central de Planeación, de los Comités y Subcomités técnicos correspondientes, las informaciones, opiniones y aclaraciones necesarias para el cabal cumplimiento de sus funciones; y
5. En general vigilar la observancia de las disposiciones contenidas en la presente Ley.

Artículo 10. Los Comités que compondrán al Consejo Nacional de Planeación Económica y Social son los siguientes:

Comité Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero;
 Comité Sectorial Industrial;
 Comité Sectorial de Transportes y Comunicaciones
 Comité Sectorial de Bienestar Social;
 Comité Sectorial de Servicios;
 Comité de Desarrollo Regional y Urbano; y
 los demás que se creen por acuerdo del Ejecutivo.

Artículo 11. Los comités estarán integrados por los funcionarios de las entidades del sector público federal que disponga el C. Presidente de la República mediante acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Las reuniones de los comités serán presididas por el funcionario titular asistente que aparezca mencionado primeramente en el propio acuerdo.

Artículo 12. Los comités, conforme a la naturaleza de las distintas materias de que se ocupen, dispondrán la creación de los subcomités que consideren necesarios para el cumplimiento de su labor.

Las reuniones de los subcomités y de los grupos de trabajo serán presididas por el funcionario asistente cuya dependencia aparezca mencionada primeramente en la resolución que cree el subcomité o grupo de trabajo correspondiente.

Artículo 13. Los subcomités y grupos de trabajo que se integren de conformidad con lo dispuesto en esta Ley funcionarán permanentemente en tanto no exista una resolución del comité o subcomité que haya dispuesto su creación.

Artículo 14. Cada comité y cada subcomité contará con un secretario técnico coordinador designado por la Comisión Central de Planeación, entre los miembros de una terna propuesta por el Comité correspondiente. Los secretarios técnicos de los grupos de trabajo serán elegidos por los integrantes de los subcomités que dispongan su creación.

Las sesiones de los comités, de los subcomités y de los grupos de trabajo serán convocadas por sus respectivos secretarios técnicos, quienes tendrán a su cargo el levantamiento de las actas respectivas que deberán ser firmadas por todos los participantes.

Artículo 15. Los comités y los subcomités podrán invitar a las organizaciones a que se refiere el Artículo 5o. cada vez que lo consideren conveniente, para conocer sus puntos de vista en relación con los asuntos que les afecten.

Artículo 16. Todas las entidades del sector público federal deberán participar en las actividades de los comités o subcomités a los que sean integradas. Sin el cumplimiento de este requisito no les será autorizado gasto alguno.

Artículo 17. Para los efectos de esta Ley cada año todas las entidades del sector público federal remitirán al Consejo Nacional de Planeación Económica y Social sus programas, planes, proyectos y todos los documentos que deban discutirse en el seno de los comités, subcomités y grupos de trabajo a que se refiere esta Ley.

Asimismo, la Secretaría de la Presidencia deberá enviar oportunamente a todos los Comités Sectoriales las proposiciones de inversión federal y demás documentos que elaboren los comités promotores del desarrollo socioeconómico establecido, por acuerdo del Ejecutivo Federal, en cada uno de los Estados.

Artículo 18. El Comité de Desarrollo Regional y Urbano tendrá por objeto producir recomendaciones que deberán hacerse llegar a los comités y subcomités sectoriales a efecto de que los analicen oportunamente. A su vez, los comités sectoriales proporcionarán al

Comité de Desarrollo Regional y Urbano aquellos datos que le permitan cumplir mejor la función a su cargo.

Artículo 19. En el seno de los comités y de los subcomités sectoriales se discutirán los problemas correspondientes a su materia y cada uno de ellos elaborará un proyecto de programa o plan, según el caso, en el que deberán especificarse los objetivos a alcanzar, las metas, las prioridades de éstas y los órganos e instrumentos adecuados para cumplirlas. Asimismo, realizarán evaluaciones jurídicas de los programas que estén en ejecución.

Estos proyectos contendrán también aquellas divergencias que no hayan podido superarse entre los representantes de los organismos oficiales a efecto de que se subsanen en el nivel inmediato superior; contendrán, asimismo, las opiniones de las organizaciones consultadas a que se refiere el Artículo 5o., que tengan mayor interés.

Artículo 20. Los proyectos de los subcomités se harán llegar a los comités que corresponda y los proyectos de éstos se remitirán a la Comisión Central de Planeación, a fin de que por su conducto, se envíen, debidamente desglosados, a los CC. Secretarios de Estado que corresponda, así como al C. Jefe del Departamento del Distrito Federal, según el caso, a efecto de que emitan su opinión acerca de los asuntos de su competencia y de que resuelvan las incompatibilidades que no hayan podido subsanarse durante el proceso. Cuando estas incompatibilidades estén referidas a la competencia de distintos Secretarios, se remitirán a todos ellos los puntos de discrepancia a efecto de que entre sí busquen su resolución.

Artículo 21. Los CC. Secretarios y el C. Jefe del Departamento del Distrito Federal devolverán la documentación a que se refiere el artículo anterior con sus opiniones sobre los proyectos a la Comisión Central de Planeación, y le transmitirán, asimismo, aquellas incompatibilidades que no hayan podido subsanar.

Los proyectos de programa o plan y las opiniones a que se refiere el artículo anterior, serán integrados en un solo proyecto por el Coordinador General. Dicho documento contendrá los puntos de vista que no se hayan compatibilizado por los CC. Secretarios y el Jefe del Departamento del Distrito Federal, así como

los de la propia Comisión Central de Planeación y será presentado a la consideración del C. Presidente de la República por el propio Coordinador General.

Artículo 22. El C. Presidente de la República estudiará y aprobará el programa o plan correspondiente, con las enmiendas que considere convenientes, y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 23. El mismo día en que se haga la publicación a que se refiere el artículo anterior, el C. Presidente de la República inaugurará los trabajos del Consejo Nacional de Planeación Económica y Social para el ciclo correspondiente y señalará los lineamientos a seguir.

Artículo 24. El plan aprobado será obligatorio, por el plazo en él previsto, para todas las dependencias, organismos y empresas de la administración pública federal. No se autorizará ningún gasto corriente o de inversión que no se ajuste al programa o plan aprobado en los términos de esta Ley. La Subcomisión de Gasto y Financiamiento velará por el exacto cumplimiento de esta obligación en la elaboración de los presupuestos específicos.

Artículo 25. Dentro de sus facultades legales, el C. Presidente de la República, en todo tiempo, podrá hacer al programa o al plan las reformas que sean necesarias en su estructura y ejecución según lo demanden las necesidades del país.

Artículo 26. La Secretaría de la Presidencia proporcionará las normas mínimas y la metodología general a que deberá sujetarse la presentación de los proyectos, programas o planes y el apoyo que sea necesario en materia de informática.

Artículo 27. Los funcionarios públicos que participen en los trabajos del Consejo Nacional de Planeación Económica y Social en representación de todas las entidades del sector público federal, lo harán en cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, por lo cual no recibirán remuneración adicional alguna.

Artículo 28. Las Comisiones, Comités y demás organismos coordinadores del sector público federal que tengan por objeto específico la elaboración de programas o planes, deberán quedar integrados dentro de la

estructura del Consejo Nacional de Planeación Económica y Social, salvo acuerdo específico del C. Presidente de la República que disponga lo contrario.

Artículo 29. Para efectos administrativos y presupuestales el Consejo Nacional de Planeación Económica y Social estará a cargo de la Secretaría de la Presidencia.

Artículo 30. El reglamento de esta Ley señalará el calendario a que deberá sujetarse el funcionamiento del Consejo Nacional de Planeación Económica y Social.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, quedando derogadas todas las disposiciones que se le opongan.

Segundo. En el plazo máximo de treinta días a partir de la fecha de publicación de esta Ley deberá expedirse el reglamento de la misma.

Reitero a ustedes en esta ocasión las seguridades de mi consideración distinguida.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
México, D. F., a de noviembre de 1975.
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ.

CONVENIOS UNICOS DE COORDINACION

ACUERDO POR EL QUE EL EJECUTIVO FEDERAL CELEBRARA CONVENIOS UNICOS DE COORDINACION CON LOS EJECUTIVOS ESTATALES. A FIN DE COORDINAR LAS ACCIONES DE AMBOS ORDENES DE GOBIERNO EN MATERIAS QUE COMPETEN AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS EJECUTIVOS ESTATALES DE MANERA

CONCURRENTE. ASI COMO EN AQUELLAS DE INTERES COMUN.

Diario Oficial del 6 de diciembre de 1976

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Federal confiere el Artículo 89 fracción I, de la Constitución Política de la República, y

CONSIDERANDO

Que es propósito fundamental del Ejecutivo a mi cargo lograr la mayor coordinación posible en las tareas de gobierno con los Ejecutivos de los Estados, a fin de fortalecer conjuntamente el sistema federal establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Que el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales tienen el propósito común de prestar una mayor atención a las necesidades regionales mediante el fortalecimiento de las finanzas estatales y el impulso a las actividades productivas en los estados, a fin de lograr un desarrollo económico equilibrado;

Que es necesario contar con la participación democrática de los distintos grupos sociales a nivel local, tanto en el planteamiento como en la resolución de sus problemas, para lo cual se debe propiciar a todos los niveles el acercamiento entre gobernantes y gobernados y la debida coordinación entre los distintos órdenes de gobierno;

Que los Estados constituyen las entidades históricamente idóneas para atender y dirigir los esfuerzos de sus comunidades, por el conocimiento directo que tienen de las necesidades y las aspiraciones de los miembros que las forman y el contacto estrecho que guardan con ellas;

Que, en la actual etapa de crecimiento del país, se afirma la conveniencia de avanzar en el proceso administrativo de descentralización de la función pública,

mediante la debida concurrencia de los Estados en el análisis de los problemas económicos y sociales de su población, en las tareas de planificación del desarrollo nacional y en la ejecución directa de los programas de gobierno:

Que el Ejecutivo Federal debe adoptar las medidas conducentes en el ámbito federal, a fin de definir los procedimientos de coordinación, entre el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales; he tenido a bien dictar el siguiente

ACUERDO

Artículo 1o. El Ejecutivo Federal celebrará Convenios Unicos de Coordinación con los Ejecutivos Estatales, a fin de coordinar las acciones de ambos órdenes de gobierno en materias que competen al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos Estatales de manera concurrente, así como en aquellas de interés común, para lo cual las Secretarías de Estado y las demás dependencias federales deberán normar su actuación de conformidad a los términos concertados en dichos convenios.

Artículo 2o. La Secretaría de la Presidencia considerará las bases del desarrollo estatal, para formular los planes nacionales y los programas de inversiones y gasto del Gobierno Federal, que deberá someter a la consideración del Presidente de la República.

Artículo 3o. Los Secretarios de Estado que correspondan, deberán recabar y evaluar, durante el curso de los primeros veinte días del mes de diciembre de cada año, los programas específicos de desarrollo que hayan presentado los Gobiernos de los Estados, con el fin de que en dicho plazo y oyendo los puntos de vista de los gobernadores, rindan un dictamen a la Secretaría de la Presidencia sobre su viabilidad, conveniencia y ubicación en el contexto de las prioridades nacionales, así como sobre los requerimientos de fondos correspondientes con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 4o. Los Secretarios de Estado que correspondan, deberán dar oportunamente su opinión al Presidente de la República sobre la coordinación que se encomienda a los gobernadores de los estados, de los programas específicos de desarrollo cuya ejecución es responsabilidad del Gobierno Federal.

Artículo 5o. Por lo que se refiere a los programas que a continuación se señalan, el Gobierno Federal podrá transferir la ejecución directa de las obras y servicios públicos a los Gobiernos de los Estados, en los términos de los Convenios respecto de:

- Agua potable y alcantarillado rurales.
- Obras en cabeceras municipales.
- Mejoramiento de la vivienda y espacios públicos.
- Construcción y rehabilitación de vivienda popular
- Casas de cultura.
- Instalaciones deportivas.
- Cárceles y Penitenciarías.
- Caminos de mano de obra.
- Caminos vecinales.
- Carreteras estatales.
- Carreteras urbanas.
- Aeropistas.
- Construcción y reparación de todo tipo de planteles escolares.
- Construcción y reparación de centros y casas de salud y asistenciales.
- Los demás que se convengan con los gobiernos de los estados.

Artículo 6o. Por lo que respecta a los programas a que se refiere el Artículo anterior los Secretarios de Estado que corresponda, deberán presentar oportunamente a la aprobación del Presidente de la República un plan de transferencias de las funciones, fondos presupuestales y recursos técnicos que correspondan a dichos programas, con el fin de que la construcción de obras y la prestación de los servicios públicos queden totalmente a cargo de los Gobiernos de los Estados.

Artículo 7o. La Secretaría de la Presidencia deberá establecer, de común acuerdo con la Secretaría de Estado que corresponda el mecanismo presupuestal de transferencia de fondos a los Gobiernos de los Estados, de conformidad con el calendario de traspaso de

los programas anteriores, que apruebe el Presidente de la República.

Artículo 8o. Las entidades del Sector Público Federal deberán prestar la asistencia técnica que soliciten los Gobiernos de los Estados, para efecto de asumir las responsabilidades de coordinación o ejecución de los programas específicos de desarrollo, que concierten el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales en los Convenios Unicos de Coordinación.

Artículo 9o. La Secretaría de Salubridad y Asistencia recabará de los Gobiernos de los Estados, los planes de coordinación que éstos elaboren para la prestación de los servicios de salud en los hospitales y clínicas dependientes de organismos descentralizados federales, con objeto de dar su opinión al Presidente de la República sobre la forma que puede adoptar la coordinación de la Federación y los Estados en esta materia.

Artículo Décimo. La Secretaría del Patrimonio Nacional deberá presentar al Presidente de la República una proposición sobre los organismos públicos descentralizados, la participación federal en empresas estatales y los patronatos creados por actos administrativos, cuyas funciones puedan ser transferidas a los Gobiernos de los Estados por tener un interés fundamentalmente local y estar directamente vinculados a los programas de desarrollo económico y social de los estados y operar en ámbitos de acción que se limitan a una entidad federativa.

Artículo Undécimo. La Secretaría de la Presidencia pondrá a disposición de los Gobiernos de los Estados los estudios de reforma administrativa con que cuenta el Gobierno Federal, y prestará la asistencia técnica que al efecto requieran las Entidades Federativas, con el fin de coadyuvar al propósito expresado por los Ejecutivos Estatales de mejorar la organización y eficiencia de las funciones públicas sobre las siguientes materias:

- a) Administración de justicia civil, penal y administrativa;
- b) Sistema de prevención social, de persecución de los delitos, y ejercicio de la acción penal, y reclusión y readaptación social;
- c) Administración local;
- d) Administración municipal; y

e) Sistema fiscal y presupuestario.

Artículo Duodécimo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaborará para que se realicen estudios sobre los esfuerzos fiscales de las entidades federativas, conteniendo los sistemas de tributación, recaudación y vigilancia de los ingresos fiscales que corresponden a los estados.

Dichos estudios los pondrá a disposición de los Ejecutivos Estatales para que se aprovechen sus conclusiones y puedan fijarse las bases sobre las cuales los Gobiernos de los Estados logren obtener niveles óptimos de recaudación fiscal.

Artículo Decimotercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de los Ejecutivos Estatales prestará asistencia técnica para establecer un sistema de coordinación administrativa y fiscal entre las entidades y sus municipios, con vista a su fortalecimiento y mayor participación en el desempeño de las responsabilidades que les corresponden.

Artículo Decimocuarto. La Secretaría de la Presidencia presentará a la consideración del Presidente de la República un proyecto de coordinación con las entidades federativas en materia de procedimientos agrarios y laborales.

Artículo Decimoquinto. La Secretaría de la Presidencia deberá recabar de los Comités Promotores del Desarrollo Socioeconómico de los Estados, informes trimestrales de evaluación de los Convenios Unicos de Coordinación que se celebren con las entidades federativas y rendir un informe periódico al Presidente de la República sobre sus resultados.

Artículo Decimosexto. Las Secretarías de Estado y demás entidades del sector público federal, tomarán todas las medidas necesarias en el ámbito de su competencia, a fin de cumplir con las obligaciones que se derivan para el Ejecutivo Federal de los Convenios Unicos de Coordinación que se celebren con los Ejecutivos Estatales.

TRANSITORIOS

Primero. Los convenios específicos que las diversas dependencias del Gobierno Federal, tanto del sector centralizado como del sector descentralizado tienen

celebrados actualmente con los Estados, continuarán vigentes en lo que no se oponga a los Convenios Unicos de Coordinación, y para dicho efecto se entenderán formando parte de los mismos.

Al tiempo que se tomen las diversas medidas administrativas a que se refiere el presente Acuerdo, los textos de los diversos convenios específicos se irán incorporando al texto de los Convenios Unicos.

Segundo. La Secretaría de la Presidencia propondrá las reformas que sean necesarias a la estructura y funcionamiento de los Comités Promotores del Desarrollo Socioeconómico de los Estados, a fin de que sirvan como órganos de consulta del Gobierno Federal y de los Gobiernos Estatales, coadyuven más eficientemente en la planificación y programación a nivel local y faciliten la participación de los diversos sectores de la comunidad en estas tareas.

Tercero. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y seis.— **José López Portillo.**— Rúbrica.— El Secretario de Gobernación, **Jesús Reyes Heróles.**— Rúbrica.— El Secretario de Marina, **Ricardo Cházaro Lara.**— Rúbrica.— El Secretario de Agricultura y Ganadería, **Francisco Merino Rábago.**— Rúbrica.— El Secretario de Obras Públicas, **Pedro Ramírez Vázquez.**— Rúbrica.— El Secretario de Comunicaciones y Transportes, **Emilio Mújica Montoya.**— Rúbrica.— El Secretario de Educación Pública, **Porfirio Muñoz Ledo.**— Rúbrica.— El Secretario de Industria y Comercio, **Fernando Solana Morales.**— Rúbrica.— El Secretario de Salubridad y Asistencia, **Emilio Martínez Manautou.**— Rúbrica.— El Secretario de Hacienda y Crédito Público, **Julio Rodolfo Moctezuma Cid.**— Rúbrica.— El Secretario del Patrimonio Nacional, **José Andrés de Oteyza Fernández.**— Rúbrica.— El Secretario de la Presidencia, **Carlos Tello Macías.**— Rúbrica.— El Secretario de la Reforma Agraria, **Jorge Rojo Lugo.**— Rúbrica.— El Secretario de Turismo, **Guillermo Rosell de la Lama.**— Rúbrica.— El Secretario del Trabajo y Previsión Social, **Pedro Ojeda Paullada.**— Rúbrica.— El Secretario de Recursos Hidráulicos, encargado del despacho, **Luis**

Robles Linares.— Rúbrica.— El Secretario de la Defensa Nacional, **Félix Galván López.**— Rúbrica.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

EXPOSICION DE MOTIVOS

C.C. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.
Presentes.

El proyecto de reorganización que me permito proponer pretende convertir la compleja estructura burocrática que ha desarrollado la Administración Pública, en un instrumento con responsabilidades claras y precisas, que evite la duplicación de las funciones y que permita que las decisiones gubernamentales se traduzcan efectivamente en los resultados que demandan los habitantes del país.

Este propósito requiere igualmente la institucionalización de la programación de las acciones de la Administración Pública, el establecimiento de prioridades, objetivos y metas, que resulten comprensibles y por lo mismo viables, no sólo para los servidores públicos sino para la población en general.

Se incorpora, por primera vez en forma explícita, el propósito de programar las acciones del Estado, porque la escasez de recursos que impiden atender todo al mismo tiempo, requiere contar con prioridades, y con un ritmo adecuado del gasto público, todo ello con la decisión de establecer el presupuesto por programas y la evaluación de resultados.

En el proyecto se propone que las dependencias directas del Ejecutivo Federal se constituyan en unidades con responsabilidad sectorial. Se pretende con ello que se encarguen de la planeación y conducción de las políticas a seguir en cada sector de actividad, para lo cual estarán facultadas para coordinar los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos que se ubiquen en el ámbito sectorial que habrá de estar a su cargo.

La existencia de tres dependencias del Ejecutivo encargadas de planeación de las actividades públicas,

de su funcionamiento y de su control, respectivamente, impidió muchas veces que estas funciones, que constituyen una tarea continua en lo administrativo, se llevaran a cabo de manera coherente y oportuna. La planeación del gasto público y de las inversiones a cargo de la Secretaría de la Presidencia, la presupuestación del gasto corriente en la Secretaría de Hacienda y la programación y el control de las entidades paraestatales en la Secretaría del Patrimonio Nacional, obligaron a ensayar diversos mecanismos intersecretariales, cuyos aciertos y dificultades llevan finalmente a proponer la integración de estas funciones bajo un solo responsable.

Se busca que sea la Secretaría de Programación y Presupuesto la encargada de elaborar los planes nacionales y regionales de desarrollo económico y social, así como de programar su financiamiento —tanto por lo que toca a la inversión como el gasto corriente— y de evaluar los resultados de su gestión. Dicha dependencia tendría igualmente a su cargo la preparación de la Cuenta Pública, incorporando una información más integral y oportuna, que permita ejercer de una manera más completa la revisión que constitucionalmente realiza el H. Congreso de la Unión.

La planeación de la acción pública tal y como se la concibe en el proyecto de ley, requiere contar con un sólido y oportuno apoyo de Información económica y social, por lo cual propone igualmente ubicar en la Secretaría de Programación y Presupuesto el sistema nacional de estadística.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

Diario Oficial del 29 de diciembre de 1976

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

CAPITULO II

De la Competencia de las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos

Artículo 26. Para el estudio, planeación* y despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Artículo 32. A la Secretaría de Programación y Presupuesto corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Recabar los datos y elaborar con la participación en su caso de los grupos sociales interesados, los planes nacionales, sectoriales y regionales de desarrollo económico y social, el plan general del gasto público de la Administración Pública Federal y los programas especiales que fije el Presidente de la República;

II. Planear obras, sistemas y aprovechamientos de los mismos; proyectar el fomento y desarrollo de las regiones y localidades que le señale el Presidente de la República para el mayor provecho general;

VI. Planear, autorizar, coordinar, vigilar y evaluar los programas de inversión pública de las dependencias de la administración pública centralizada y la de las entidades de la administración paraestatal;

REFORMAS A LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

Diario Oficial del 4 de enero de 1982

Artículo 32. A la Secretaría de Programación y Presupuesto corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Proyectar la planeación nacional de carácter global y elaborar, con la participación de los grupos sociales interesados, el plan nacional correspondiente;

II. Formular y coordinar la ejecución de los programas regionales y especiales que le señale el Presidente de la República;

III. Coordinar las actividades de planeación del desarrollo integral del país, así como procurar la congruencia entre las acciones de la Administración Pública Federal y los objetivos, estrategias, políticas y metas del plan nacional;

IV. Establecer la metodología y los procedimientos de participación y consulta a los sectores social y privado en las actividades de planeación, así como coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los ejecutivos locales para la ejecución de acciones coordinadas para el desarrollo integral de las diversas regiones del país;

VII. Autorizar los programas de inversión pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

XII. Intervenir en la planeación, programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación de las obras públicas que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XVI. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación.

COMITES PROMOTORES DEL DESARROLLO SOCIOECONOMICO

DECRETO POR EL QUE SE DISPONE QUE LOS COMITES PROMOTORES DEL DESARROLLO SOCIOECONOMICO ESTABLECIDOS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA, SON ORGANISMOS PUBLICOS DOTADOS DE PERSONALIDAD JURIDICA Y DE PATRIMONIO PROPIO, CON EL FIN DE ASESORAR Y COADYUVAR EN LA PLANIFICACION Y PROGRAMACION A NIVEL LOCAL, CON LA COLABORACION DE LOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNIDAD.

Diario Oficial del 11 de marzo de 1977

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que me confiere el Artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en las fracciones I, II y XVII del Artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

CONSIDERANDO

Que en la actual etapa de la vida económica y social del país, existe la necesidad de fortalecer nuestro sistema federal, impulsar un desarrollo armónico y compartido en la comunidad, y alcanzar un crecimiento equilibrado de las distintas regiones del país;

Que es conveniente adoptar medidas para una mejor solución de los objetivos antes señalados, por lo que el Ejecutivo Federal debe formular planes de desarrollo económico y social de carácter nacional, en los cuales se fijen objetivos y metas de desarrollo regional y los medios para alcanzar unos y otras en los distintos sectores de la actividad, tomando en cuenta los objetivos y prioridades de las comunidades estatales;

Que en cumplimiento de las responsabilidades que les corresponden a los Gobiernos Federales y Estatal, es imprescindible elevar en forma coordinada los niveles de eficiencia en la realización de obras, en la prestación de servicios públicos y en el desempeño de las acciones de Gobierno, así como en la reforma administrativa que se lleva a cabo en sus respectivos ámbitos de competencia, asegurando la coordinación y congruencia en la actuación de las dependencias que formen parte de uno y otro;

Que el Ejecutivo Federal ha venido celebrando con los gobiernos de los Estados, convenios únicos de coordinación para la realización de programas específicos de desarrollo sobre ejecución de obras, prestación de servicios públicos y acciones que les competen de manera concurrente, así como regular las relaciones de

coordinación que deben existir entre ambos órdenes de gobierno, teniendo la obligación de evaluar los programas de los Ejecutivos Estatales conforme a los planes nacionales de desarrollo y a las prioridades que los mismos establezcan:

Que por Decretos de fechas 27 de enero de 1975 y 26 de junio de 1976, se fijaron y ampliaron las funciones a los Comités Promotores del Desarrollo Socioeconómico de los Estados, convirtiéndolos en canales con eficacia comprobada para la programación del desarrollo regional, por lo que se considera conveniente seguirlos utilizando en la promoción y coordinación de las actividades socioeconómicas entre la Federación y los Estados.

Que el Ejecutivo Federal está interesado en ajustar la estructura y funcionamiento de los Comités Promotores del Desarrollo Socioeconómico de los Estados, para que sirvan como órganos de consulta del Gobierno del Estado, para la formulación de las bases del desarrollo económico y social de la entidad y los proyectos de programas de inversión, gasto y financiamiento federal de interés local, coadyuven eficientemente a la planificación y programación del desarrollo estatal y faciliten la participación de los diversos sectores de la comunidad; he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

Artículo 1o. Los Comités Promotores del Desarrollo Socioeconómico establecidos en todos y cada uno de los Estados de la República, son organismos públicos dotados de personalidad jurídica y de patrimonio propio, con el fin de asesorar y coadyuvar en la planificación y programación a nivel local, con la colaboración de los diversos sectores de la comunidad.

Artículo 2o. Los Comités tendrán a su cargo las siguientes funciones:

I. Promover y coordinar la ejecución de las obras de las diferentes dependencias federales y fomentar las diversas actividades de los integrantes de la población de la Entidad para impulsar el Desarrollo Socioeconómico de la misma. Las proposiciones de Programas de Inversión que se hagan al C. Presidente de la República, deberán presentarse por conducto de la Secretaría de

Programación y Presupuesto a más tardar el día 15 de agosto de cada año. Estas proposiciones deberán venir desglosadas a nivel de obras o servicio y claramente jerarquizadas, a efecto de que las variaciones en la asignación de recursos por parte de las dependencias federales sean oportunamente previstas;

II. Proponer al Gobierno Federal y a los Locales, los convenios que consideren necesarios para la consecución del Desarrollo Socioeconómico, y coordinarse entre sí para el desarrollo integral de alguna región donde existe interés económico o social;

III. Acordar el establecimiento de Subcomités y grupos de trabajo sectoriales o regionales cuando el cumplimiento de sus objetivos y de sus programas lo requiera, conforme a los lineamientos generales del presente Decreto y con indicación de las zonas o municipios de los Estados que comprenda, en su caso, el área territorial de los Subcomités.

Los Subcomités tendrán la calidad de dependencias auxiliares del Comité y el ejercicio de sus funciones será coordinado por un delegado designado por el propio Comité;

IV. Levantar un inventario de los recursos humanos y naturales de la Entidad;

V. Proponer programas a corto, mediano y largo plazo, para el desarrollo social y económico de la Entidad, tendientes al mejor aprovechamiento de sus recursos naturales y humanos;

VI. Elaborar proyectos concretos de inversión con base en una adecuada jerarquización de las necesidades que deben ser atendidas;

VII. Fomentar el aprovechamiento racional, entre otros, de los recursos agrícolas, ganaderos, hidráulicos, energéticos y turísticos, así como impulsar el desarrollo industrial de las regiones y la comercialización de sus productos;

VIII. Asesorar a las autoridades y a los sectores de las poblaciones de la Entidad correspondiente, en la preparación y ejecución de estudios de factibilidad económica para el establecimiento de empresas cuya finalidad sea el aprovechamiento de los recursos de los Estados;

IX. Incrementar el empleo productivo en el campo y en la ciudad y procurar la capacitación de los recursos humanos,

X. Proponer al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, las medidas administrativas y financieras necesarias para el cumplimiento de las funciones y la consecución de los objetivos de los Comités;

XI. Funcionar como órgano de consulta tanto del Gobierno Estatal como del Gobierno Federal, sobre la situación socioeconómica de la Entidad;

XII. Evaluar e informar trimestralmente a la Secretaría de Programación y Presupuesto, sobre el desarrollo de los Convenios Unicos de Coordinación que se celebren con los ejecutivos estatales;

XIII. Las demás que sean necesarias para el eficaz cumplimiento de su objeto.

Artículo 3o. Los Comités Promotores del Desarrollo Socioeconómico se integrarán:

I. Por un Presidente, que será el C. Gobernador de la Entidad respectiva, a quien se extenderá la invitación correspondiente;

II. Por un Coordinador, que será designado por el C. Gobernador y que fungirá como su representante para la coordinación de las actividades que el Comité llevará a cabo, a fin de que la ejecución de los programas de las dependencias federales se efectúen en la Entidad dentro de un esquema de congruencia con las que desarrollen el Gobierno Estatal y los sectores de la población. Asimismo, se encargará de coordinar la ejecución de las obras y la prestación de los servicios comprendidos en los Convenios Unicos de Coordinación;

III. Por un Secretariado Técnico, que se constituirá por el personal que le asigne la Secretaría de Programación y Presupuesto, el cual residirá permanentemente en las Entidades Federativas respectivas, y que se encargará de apoyar las actividades de promoción, programación, evaluación y todas aquellas que requiera el Comité para su funcionamiento. El Secretario de Programación y Presupuesto designará al Secretario Técnico, quien fungirá además como representante de dicha Secretaría;

IV. Por los funcionarios de mayor jerarquía del Gobierno Federal que actúen en dichos Estados, que los C.C. Gobernadores consideren conveniente;

V. Por los funcionarios de los Gobiernos Estatales designados por los C.C. Gobernadores;

VI. Por los Ayuntamientos que libremente acepten participar;

VII. Por los representantes de los sectores social y privado de la comunidad que libremente acepten participar.

El Presidente del Comité invitará a los Senadores y Diputados Federales a participar como miembros del Comité de la Entidad que representan.

Por cada miembro propietario de los señalados en las fracciones IV a VII, se designará un suplente.

Artículo 4o. Los Comités dispondrán de los siguientes recursos: las asignaciones que les fije el Gobierno Federal, las aportaciones que desearan hacer los Gobiernos de las Entidades y los sectores y agrupaciones representados, así como los ingresos que por otros conceptos les correspondan.

Las remuneraciones del Coordinador, y de los funcionarios y empleados del Secretariado Técnico quedarán a cargo de las Entidades que los hubieren designado.

Artículo 5o. Los Comités sesionarán, cuando menos, una vez al mes con la asistencia de su Presidente y de la mayoría de sus miembros:

Artículo 6o. Los Comités coordinarán sus actividades con las de la Secretaría de Programación y Presupuesto, a fin de que sus acciones sean coincidentes con las políticas generales de desarrollo nacional, regional y sectorial.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en el Distrito Federal, a los diez días del mes de marzo de mil novecientos setenta y siete.— **José López Portillo.**— Rúbrica.— El Secretario de Gobernación, **Jesús Reyes Heróles.**— Rúbrica.— El Secretario de Marina, **Ricardo Cházaro Lara.**— Rúbrica.— El Secretario de Hacienda y Crédito Público, **Julio Rodolfo Moctezuma Cid.**— Rúbrica.— El Secretario de Programación y Presupuesto, **Carlos Tello.**— Rúbrica.— El Secretario

de Patrimonio y Fomento Industrial, **José Andrés de Oteyza Fernández.**— Rúbrica.— El Secretario de Comercio, **Fernando Solana Morales.**— Rúbrica.— El Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, **Francisco Merino Rábago.**— Rúbrica.— El Secretario de Comunicaciones y Transportes, **Emilio Mújica Montoya.**— Rúbrica.— El Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, **Pedro Ramírez Vázquez.**— Rúbrica.— El Secretario de Educación Pública, **Porfirio Muñóz Ledo.**— Rúbrica.— El Secretario de Salubridad y Asistencia, **Emilio Martínez Manautou.**— Rúbrica.— El Secretario de la Reforma Agraria, **Jorge Rojo Lugo.**— Rúbrica.— El Secretario de Turismo, **Guillermo Rosell de la Lama.**— Rúbrica.

NORMAS DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS GENERALES DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO. DIARIO OFICIAL DEL 26 DE DICIEMBRE DE 1978.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos,— Secretaría de Programación y Presupuesto.

RICARDO GARCIA SAINZ, Secretario de Programación y Presupuesto, con fundamento en los Artículos 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 4o. y 31 del Reglamento Interior de esta Secretaría y en el Decreto Presidencial por el que se crean diversas unidades administrativas dependientes de la propia Secretaría, de 8 de agosto del presente año, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 del mismo mes, y

CONSIDERANDO

Que una eficiente promoción del desarrollo económico y social del país, presupone la instrumentación congruente y oportuna de planes y programas a nivel regional, que siendo acordes con los objetivos y prioridades nacionales, contemplen la problemática, necesidades y características peculiares de cada región, a fin de que la canalización de los recursos federales destinados al efecto se lleve a cabo de una manera más racional para obtener de ellos el óptimo beneficio y aprovechamiento, sirviendo lo anterior al mismo tiempo, como un instrumento que permita armonizar y conjuntar las políticas de un desarrollo más equilibrado;

Que es preocupación del Ejecutivo Federal, convertir a la Administración Pública en un instrumento moderno y eficiente que propicie la orientación y el estímulo del desarrollo y proporcione los recursos a los objetivos y metas que han sido fijados, razón por la cual, dentro de la estructura administrativa de la Secretaría de Programación y Presupuesto se prevé en su Reglamento Interior el establecimiento de delegaciones regionales en el número, lugares y con la circunscripción que determine el Titular de la misma y cuya competencia será la de ejercer dentro del ámbito territorial que se les haya asignado, las atribuciones de las unidades administrativas de la Secretaría que expresamente se les deleguen;

Que la delegación de atribuciones hacia los órganos operativos correspondientes, debe llevarse a cabo conforme a un proceso que garantice el funcionamiento uniforme de toda la Secretaría, para lo cual se ha previsto la institucionalización de tres niveles de acción, que son: el normativo, el de coordinación y el operativo;

Que el nivel normativo deben constituirlo las tareas relativas al establecimiento de normas, sistemas y procedimientos, así como de objetivos y metas concretas para las delegaciones regionales, quedando a cargo de las Subsecretarías de Programación y Presupuesto y Evaluación, la Oficialía Mayor, la Coordinación General del Sistema Nacional de Información y las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, Documentación y Análisis y Difusión, actuando como unidades administrativas centrales, rectoras según la materia y en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de pro-

picar uniformidad y congruencia en las acciones que esta dependencia del Ejecutivo Federal debe desarrollar en el ámbito territorial de cada entidad federativa;

Que, por otra parte, mediante Decreto Presidencial del 8 de agosto del presente año, publicado en el *Diario Oficial* de la Federación el 10 del mismo mes, fueron creadas nuevas unidades administrativas dependientes de la Secretaría de Programación y Presupuesto, entre las que se encuentra la Coordinación General de Delegaciones, unidad que ha sido concebida como el nivel de coordinación dentro del Acuerdo del suscrito de fecha 31 de agosto último publicado en el *Diario Oficial* de la Federación el día 4 del mes siguiente, se delegaron las facultades de coordinar las relaciones con las entidades federativas en las actividades de la competencia de la Secretaría; representar al Secretario ante las delegaciones; coordinar las acciones que los delegados ejerzan en cumplimiento de las políticas dictadas por el Titular de la Secretaría; proponer las medidas técnicas y administrativas necesarias para la mejor organización y funcionamiento de las delegaciones y subdelegaciones; coordinar la desconcentración de la Secretaría a nivel estatal; y apoyar y supervisar la operación de las delegaciones y subdelegaciones;

Que la creación de la mencionada unidad obedece a la necesidad de establecer mecanismos de control en la operación de las delegaciones regionales, así como una coordinación adecuada entre éstas y las unidades administrativas centrales de la Secretaría, constituyendo las primeras los órganos de resolución y ejecución en los lugares en donde deben instrumentarse las decisiones, y las segundas los centros de decisión y normatividad; todo ello, dentro de un marco de uniformidad, cuyo diseño e instrumentación será responsabilidad de la propia Coordinación General de Delegaciones;

Que el objetivo fundamental del proceso de delegación de atribuciones a que se viene haciendo mérito, es lograr la máxima eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las funciones a cargo de la Secretaría en el ámbito estatal, ante lo cual se ha diseñado un tercer nivel de acción, el operativo, que se sintetiza en el establecimiento formal de las delegaciones regionales;

Que para lograr los propósitos señalados, se ha estimado necesario que las delegaciones regionales lleven a cabo las funciones que corresponden a la Secretaría

a nivel estatal, responsabilizando de ello a los titulares de las mismas, a fin de fortalecer en la medida necesaria su capacidad de decisión y ejecución;

Que por todo lo anterior, se hace necesario articular y unificar la acción de las distintas representaciones de la Secretaría que actualmente operan en los Estados, colocándolas bajo la dirección de un solo responsable, definiendo su organización y funciones y otorgándoles las atribuciones necesarias para que estén en posibilidad de atender con eficacia los asuntos de su responsabilidad lo que permitirá brindar un más amplio respaldo a los Comités Promotores del Desarrollo Socioeconómico; establecer unidad de mando y responsabilidad de la Secretaría a nivel estatal; armonizar sus relaciones con las autoridades estatales, municipales, representantes de otras Secretarías y de los sectores privados y social; elevar la eficacia en la operación y optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos materiales y presupuestarios de la Secretaría, he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

CAPITULO I

De las Delegaciones Regionales

Artículo 1o. Se establece en cada uno de los Estados de la República Mexicana, una Delegación Regional de la Secretaría de Programación y Presupuesto, en los términos del presente Acuerdo.

Artículo 2o. Las Delegaciones regionales son unidades administrativas de la Secretaría, que ejercerán por delegación las atribuciones señaladas en este Acuerdo y las que en lo sucesivo disponga el Secretario, siguiendo los lineamientos que el mismo determine, así como las demás que legalmente les sean encomendadas.

Artículo 3o. Las delegaciones regionales de la Secretaría conducirán sus actividades en forma programada y con base en las políticas, prioridades y restricciones que para el logro de los objetivos y metas de los planes a cargo de la Secretaría, establezca el Secretario.

Artículo 4o. Las delegaciones regionales ejercerán sus atribuciones con estricto apego a las normas administrativas generales, sistemas y procedimientos que establezcan, conforme a sus respectivas competencias,

las Subsecretarías de Programación, Presupuesto y Evaluación, la Oficialía Mayor, la Coordinación General del Sistema Nacional de Información y las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, Documentación y Análisis y Difusión, y a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

A las Subsecretarías, Oficialía Mayor, Coordinación General y Direcciones Generales mencionadas se les denominará genéricamente en este Acuerdo como "unidades administrativas centrales", salvo mención expresa.

Artículo 5o. Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior, las unidades administrativas centrales deberán tomar en consideración las normas, sistemas y procedimientos que rijan sus propias funciones, adecuándolos a las circunstancias particulares de organización y funcionamiento a nivel estatal de las delegaciones regionales y observarán, asimismo, los lineamientos que sobre la materia fije el Secretario, por conducto de la Unidad de Organización y Métodos.

Artículo 6o. Las unidades administrativas centrales asesorarán técnicamente a las delegaciones regionales en la implantación y operación definitiva de las mencionadas normas, sistemas y procedimientos, quedando a cargo de la Coordinación General de Delegaciones, el establecimiento de los mecanismos de coordinación que se requieran para la más adecuada y eficaz realización de los trabajos respectivos.

Artículo 7o. Las normas, sistemas y procedimientos que se establezcan conforme al presente Acuerdo serán revisados con la periodicidad que determine el Secretario o a propuesta de la Coordinación General de Delegaciones, la que vigilará, además, que los mismos se mantengan permanentemente actualizados, en función de aquellos que rijan para las unidades administrativas centrales y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Para la implantación de las modificaciones o adecuaciones que en cada caso se requieran, se deberá contar con la autorización previa del Titular de la Secretaría, emitida por conducto de la Coordinación General de Delegaciones.

Artículo 8o. Las delegaciones regionales, en su operación normal, conducirán sus relaciones con las unidades administrativas centrales a través de la Coor-

dinación General de Delegaciones y conforme a las políticas y lineamientos generales que, por su conducto, señale el Titular de la Secretaría.

Artículo 9o. Para los efectos del presente Acuerdo, la Coordinación General de Delegaciones, conforme a sus atribuciones, tendrá a su cargo:

I. Coordinar y supervisar el funcionamiento de las delegaciones regionales;

II. Coordinarse con los responsables de las unidades administrativas centrales y de Organización y Métodos, a fin de establecer las normas, sistemas y procedimientos que deberán regir para las delegaciones regionales;

III. Vigilar que las delegaciones cumplan con las normas, lineamientos y políticas generales establecidas;

IV. Preservar la congruencia en la formulación y ejecución de los programas a cargo de las delegaciones;

V. Diseñar y establecer los mecanismos que permitan conocer el grado de avance de los programas de las delegaciones así como los objetivos alcanzados;

VI. Realizar los estudios pertinentes para promover la continuidad del proceso de desconcentración de funciones de la Secretaría, partiendo del análisis de la operación general de las delegaciones regionales;

VII. Difundir entre las delegaciones, con la amplitud necesaria, las normas, lineamientos y políticas generales que deberán observar en el ejercicio de sus funciones; y

VIII. Mantener permanentemente informado al Secretario y, cuando así lo soliciten, a los responsables de las unidades administrativas centrales, acerca de la implantación de los sistemas y procedimientos aprobados para las delegaciones, del cumplimiento de sus programas y de los objetivos por ellas alcanzados.

Artículo 10. Las delegaciones regionales tendrán las siguientes atribuciones:

I. Ejecutar, coordinar y supervisar los programas de la Secretaría dentro del ámbito territorial de su jurisdicción, ajustándose a las disposiciones aplicables y a las normas, sistemas y procedimientos que establezcan las unidades administrativas centrales siguiendo los lineamientos que fije el Secretario;

II. Mantener las relaciones necesarias con las autoridades estatales y municipales que correspondan, para la ejecución de los programas y convenios en que

aquéllas participen conjuntamente con la Secretaría;

III. Establecer mecanismos de coordinación con las representaciones locales del Gobierno Federal para la ejecución de las acciones que deban ser emprendidas conjuntamente;

IV. Prestar apoyo técnico y de organización a las labores a cargo del Comité Promotor del Desarrollo Socioeconómico del Estado, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

V. Supervisar la ejecución de los programas de inversión pública federal que se realicen en el Estado,

VI. Coordinar, apoyar y supervisar la ejecución de los programas y proyectos insertos en el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural;

VII. Apoyar al Comité Promotor del Desarrollo Socioeconómico del Estado, en la formulación de los programas que deba contener el Convenio Unico de Coordinación;

VIII. En los términos que establezca la Coordinación General del Sistema Nacional de Información, captar, procesar y difundir información estadística, geográfica y cartográfica de la entidad; proporcionar servicio de cómputo e informática, y promover el desarrollo y fortalecimiento de los servicios locales de información;

IX. Informar a las unidades administrativas centrales sobre las actividades a cargo de la Delegación Regional, con la periodicidad y bajo los lineamientos que se establezcan, o a requerimiento expreso que al efecto hagan las propias unidades, por conducto de la Coordinación General de Delegaciones;

X. Solicitar a las unidades administrativas centrales, por conducto de la Coordinación General de Delegaciones, el apoyo técnico y operacional que requieran para el adecuado desempeño de sus funciones, y

XI. Las demás que en lo sucesivo les delegue el Secretario o legalmente les sean encomendadas.

CAPITULO II

De la Organización de las Delegaciones Regionales

Artículo 11. Para el adecuado ejercicio de sus funciones las delegaciones regionales contarán con las siguientes unidades:

- I. Delegado;
- II. Unidad de Programación;
- III. Unidad de Presupuesto;
- IV. Unidad de Supervisión y Control;
- V. Unidad del Sistema Nacional de Información;
- VI. Unidad de Apoyo Administrativo;
- VII. Las Subdelegaciones que determine el Secretario, y
- VIII. Comité Interno de Administración Delegacional.

Artículo 12. La comunicación, con las diversas unidades de las delegaciones regionales se hará, invariablemente, por conducto del Delegado correspondiente.

CAPITULO III

De los Delegados

Artículo 13. Al frente de las delegaciones regionales habrá un Delegado que será nombrado por el Secretario.

Artículo 14. Los delegados serán los representantes del Secretario ante las autoridades federales, estatales y municipales, así como ante los representantes de los sectores privado y social, dentro del ámbito territorial de la entidad federativa correspondiente.

Las atribuciones conferidas a las delegaciones regionales se ejercerán por el Delegado, quien se auxiliará de los Jefes de Unidad y Subdelegados que determine el Secretario, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Artículo 15. Los Delegados tendrán las siguientes funciones:

I. Tramitar y resolver los asuntos de la competencia de la Secretaría en el ámbito de su jurisdicción conforme a las normas que establezcan las unidades administrativas centrales;

II. Coordinar a nivel estatal los programas de la Secretaría de acuerdo a los lineamientos que señale el Titular de la misma, responsabilizándose ante éste, del adecuado ejercicio de las funciones a su cargo,

III. Fungir como Secretario Técnico del Comité Promotor del Desarrollo Socioeconómico del Estado;

IV. Elaborar los programas específicos de actividades de la Secretaría en el Estado, orientándolos de acuerdo a los objetivos y programas generales de la misma, así como proponer el presupuesto necesario para su ejecución;

V. Dirigir, coordinar, controlar y supervisar los trabajos de la Delegación Regional, vigilando que las actividades de las diferentes unidades de la misma se realicen de acuerdo a las normas, sistemas y procedimientos establecidos por las unidades administrativas centrales;

VI. Presidir el Comité Interno de Administración Delegacional, elevando a la consideración del Secretario, por conducto, de la Coordinación General de Delegaciones, las propuestas y sugerencias emanadas de las reuniones;

VII. Apoyar técnicamente la elaboración de la propuesta anual de inversión pública federal en el Estado,

VIII. Autorizar reasignaciones y cancelaciones de partidas presupuestales correspondientes a los programas de inversión pública federal, dentro de los lineamientos y limitaciones que establezca la Subsecretaría de Presupuesto;

IX. Emitir opinión sobre las solicitudes de apoyo federal a las finanzas de los gobiernos estatales o municipales, en materia que compete a la Secretaría, proporcionando toda la información pertinente a cada caso particular;

X. Apoyar las funciones a cargo de los delegados coordinadores del Programa Nacional de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres que operen en el Estado, y procurar su integración a los planes y programas estatales;

XI. Dirigir, en el Estado, las actividades de la Secretaría relativas al Sistema Nacional de Información, con apego a los lineamientos que establezca la Coordinación General del Sistema Nacional de Información;

XII. Autorizar la imposición, ajuste y cancelación de multas a los informantes, que no cumplan con las disposiciones de la Ley Federal de Estadística, conforme a las normas establecidas para tal efecto;

XIII. Administrar los recursos humanos, presupuestarios y materiales asignados a la Delegación a su cargo, ajustándose a las políticas y normas establecidas por la Oficialía Mayor;

XIV. Informar mensualmente al Secretario sobre el funcionamiento General de la Delegación;

XV. Proponer a la Oficialía Mayor, por conducto del Coordinador General de Delegaciones, la designación o remoción de los funcionarios de la Delegación, de acuerdo con las normas respectivas y la plantilla autorizada;

XVI. Desempeñar las comisiones que el Secretario les encomiende y mantenerlo permanentemente informado sobre el desarrollo de sus actividades a través de la Coordinación General de Delegaciones, y

XVII. Las demás que les delegue el Titular de la Secretaría y las que legalmente les sean encomendadas.

CAPITULO IV

De las Funciones de las Unidades de las Delegaciones Regionales

Artículo 16. Las unidades de las delegaciones regionales realizarán sus funciones conforme a las normas que, según sus respectivas competencias, establezcan las unidades administrativas centrales.

Artículo 17. La Unidad de Programación tendrá a su cargo las siguientes funciones:

I. Participar con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con las organizaciones de los sectores social y privado, en la elaboración de los planes y programas estatales de desarrollo económico y social de corto, mediano y largo plazo;

II. Apoyar al Comité Promotor del Desarrollo Socio-Económico del Estado, en la realización de las siguientes actividades;

- a) Elaboración de la propuesta anual de inversión pública federal;
- b) Formulación de proyectos productivos para aprovechar los recursos disponibles en el Estado;
- c) Promoción de la óptima utilización de la infraestructura con que cuenta el Estado y el incremento de la productividad a través de la elaboración de proyectos complementarios, y
- d) Análisis de las alternativas para proponer la incorporación de nuevos programas y proyec-

tos al Convenio Unico de Coordinación, al Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural o a otros instrumentos orientados a la promoción del desarrollo socioeconómico del Estado;

III. Elaborar los programas especiales que fije el Presidente del Comité Promotor del Desarrollo Socio-económico del Estado, y

IV. Las demás actividades de programación que determine el Secretario, las normas correspondientes o que le sean señaladas por el Delegado.

Artículo 18. La Unidad de Presupuesto tendrá a su cargo las siguientes funciones:

I. Promover la oportuna ministración de los recursos federales autorizados para los distintos proyectos de desarrollo socioeconómico en el Estado;

II. Participar en la formulación de la propuesta anual de inversión pública federal, así como de los programas especiales que fije el Presidente del Comité Promotor del Desarrollo Socio-Económico;

III. Elaborar los estudios necesarios en relación con las propuestas de reasignaciones, refrendos y cancelaciones de partidas presupuestarias y de los programas de inversión pública federal; así como con las relativas a los apoyos federales a las finanzas del Gobierno del Estado y de los Municipios, en materia que compete a la Secretaría;

IV. Coadyuvar en la elaboración del proyecto de calendarización de la inversión pública federal que se ejercerá a través de los distintos programas para el desarrollo socioeconómico del Estado;

V. Participar en el análisis de alternativas, donde se propongan nuevos programas de inversión a nivel estatal;

VI. Respaldar los trabajos de integración de los expedientes técnicos de los proyectos insertos en el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural en el Convenio Unico de Coordinación;

VII. Autorizar y registrar los documentos que afecten el Presupuesto de Egresos de la Federación;

VIII. Autorizar y realizar los trámites técnico-administrativos reguladores del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación;

IX. Captar el avance del gasto público federal en el Estado, mediante el registro de pólizas de operaciones presupuestarias;

X. Autorizar y registrar documentos que modifican la situación del personal civil federal radicado en la Entidad y proporcionar la información sobre el estado que guarda el trámite de sus remuneraciones;

XI. Registrar los documentos que inciden en la ejecución de las obras públicas federales en el Estado, así como vigilar el cumplimiento de las normas establecidas para el efecto;

XII. Asesorar a los funcionarios federales y a los estatales y municipales que lo soliciten, en la aplicación de las disposiciones técnicas en materia de presupuesto y contabilidad gubernamental;

XIII. Reunir y proporcionar la información financiera que requiera la Subsecretaría de Presupuesto, para la toma de decisiones en materia presupuestaria, y

XIV. Las demás actividades que en materia de presupuesto y contabilidad gubernamental determine el Secretario, las normas correspondientes o que le sean señaladas por el Delegado.

Artículo 19. La Unidad de Supervisión y Control tendrá a su cargo las siguientes funciones:

I. Operar a nivel estatal los sistemas y procedimientos de control de gasto público en los términos de las normas correspondientes;

II. Supervisar la realización de las obras y prestación de los servicios contenidos en el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural y evaluar su impacto en términos de desarrollo social y económico,

III. Colaborar con el Comité Promotor del Desarrollo Socioeconómico, en la supervisión del avance del Convenio Único de Coordinación;

IV. Apoyar técnicamente al Delegado en las tareas de evaluación del funcionamiento de la Delegación y para los mismos fines, al Comité Promotor del Desarrollo Socioeconómico;

V. Integrar los informes que deba rendir el Delegado sobre el avance de los programas y proyectos en proceso de ejecución, así como sobre los resultados de los proyectos terminados, y

VI. Las demás actividades que determine el Secretario, las normas de operación o que le sean señaladas por el Delegado.

Artículo 20. La Unidad del Sistema Nacional de Información tendrá las siguientes funciones:

I. La captación de información primaria para elaborar estadísticas;

II. La crítica, validación, codificación y digitación de la información captada;

III. La actualización y mantenimiento de directorios de empresas, establecimientos y personas, para fines estadísticos;

IV. El levantamiento de información básica para elaborar la cartografía;

V. La aplicación o cancelación de multas a los informantes que no cumplan con las disposiciones de la Ley Federal de Estadística, conforme a las normas establecidas para tal efecto;

VI. La prestación de servicios de información a instituciones gubernamentales, privadas y público en general;

VII. Apoyar el levantamiento censal dentro de la entidad federativa, de acuerdo a las directrices que le indique la Coordinación General del Sistema Nacional de Información;

VIII. Promover la utilización pública de la información estadística, así como la mejor participación de las diversas fuentes informativas en el otorgamiento de datos;

IX. Coadyuvar al desarrollo de sistemas locales de información con la participación de los gobiernos locales y la asistencia técnica de la Coordinación General del Sistema Nacional de Información;

X. Proporcionar servicios de cómputo e informática a las unidades de la Delegación que así lo requieran, bien sea a través de equipos locales o de terminales remotas y línea de comunicación;

XI. Proporcionar la asesoría técnica necesaria para el aprovechamiento de los recursos y sistemas de información automatizada, desarrollados en la Coordinación General del Sistema Nacional de Información, y

XII. Las demás actividades que en materia del Sistema Nacional de Información determinen el Secretario, las normas relativas o que le sean señaladas por el Delegado.

Artículo 21. La Unidad de Apoyo Administrativo tendrá a su cargo las siguientes funciones:

I. Formular el anteproyecto anual de presupuesto por programas de la Delegación e informar mensualmente al Delegado, del alcance de objetivos, metas y resultados en materia de utilización eficaz y eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales;

II. Supervisar y controlar el correcto ejercicio de las partidas que integren el presupuesto autorizado;

III. Realizar las labores de reclutamiento, selección y control del personal de la Delegación, aplicando asimismo los programas de capacitación, desarrollo e incentivos al personal;

IV. Difundir y coordinar la aplicación de las Condiciones Generales de trabajo y del Reglamento de Escalafón;

V. Prestar los servicios de apoyo necesarios para el buen funcionamiento de la Delegación, tales como: control de correspondencia, archivo, vigilancia, mensajería, transportes, limpieza, conservación y mantenimiento;

VI. Atender los proyectos y adaptaciones que las oficinas de la Delegación requieran;

VII. Gestionar la adquisición de bienes y servicios para la Secretaría en el Estado, en los términos de las disposiciones aplicables y observando estrictamente las normas que al respecto establezca la Oficialía Mayor;

VIII. Suministrar y controlar los bienes que requieran las oficinas de la Delegación;

IX. Llevar el registro de la información contable interna;

X. Establecer y operar el sistema de orientación, información y quejas de la Secretaría en el Estado, y

XI. Las demás que en materia de administración determinen el Secretario, las normas relativas o que le sean señaladas por el Delegado.

CAPITULO V

De las Subdelegaciones

Artículo 22. Cuando por la significación de los programas a realizar, los volúmenes de inversión pública, o por otras circunstancias económicas y sociales de determinadas regiones o localidades de un Estado, se considere conveniente reformar la estructura organiza-

tiva de la Delegación Regional respectiva, mediante acuerdo del Secretario se crearán subdelegaciones, las cuales funcionarán conforme a los lineamientos que en cada caso se determinen y los que señala este Acuerdo.

Artículo 23. Las subdelegaciones creadas en los términos del artículo anterior, estarán a cargo de un Subdelegado, que será nombrado por el Secretario.

Artículo 24. Los subdelegados dependerán del Delegado correspondiente a su circunscripción, responsabilizándose ante dicho funcionario del estricto cumplimiento de las normas aplicables en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 25. Para su adecuado funcionamiento, las subdelegaciones contarán con la estructura y organización que en cada caso se determine en función de las actividades que deban realizar y de los volúmenes de operación.

CAPITULO VI

Del Comité Interno de Administración Delegacional

Artículo 26. El Comité Interno de Administración Delegacional funcionará como un sistema de coordinación y participación para facilitar el cumplimiento de los objetivos y programas de la Secretaría, en el ámbito estatal.

Artículo 27. El Comité Interno de Administración Delegacional estará integrado por:

I. El Delegado;

II. Los Jefes de la Unidad de la Delegación;

III. En su caso, el o los delegados coordinadores del Programa Nacional de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres establecidas en el Estado, y

IV. Los subdelegados en su caso.

Artículo 28. El Comité Interno de Administración Delegacional se reunirá cuando menos una vez al mes, dentro de los primeros diez días, o con mayor frecuencia si así lo determina el Delegado, para analizar el desarrollo de los programas, específicos de actividades de la Secretaría en el Estado y sugerir, en su caso, las

medidas necesarias para aumentar su eficiencia. Entre otros, se tratarán invariablemente los siguientes asuntos:

- I. El avance financiero y físico de los programas de inversión pública federal en el Estado;
- II. La oportunidad en la ministración de fondos para el Covenio Unico de Coordinación y el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural;
- III. Las propuestas de modificación a la programación y asignación presupuestarias, tales como reasignaciones, refrendos, ampliaciones y cancelaciones, así como las solicitudes de apoyo federal a las finanzas del Gobierno Estatal y los Municipios;
- IV. En los Estados fronterizos o con zonas libres, las actividades desarrolladas por el o los delegados coordinadores respectivos;
- V. El avance y condiciones de los programas de información económica, social, geográfica y cartográfica;
- VI. La actividad general, los problemas operativos y las sugerencias para resolverlos, de las diversas unidades de la Delegación, y en su caso, de las Subdelegaciones;
- VII. El ejercicio del presupuesto autorizado a la Delegación;
- VIII. Las disposiciones, programas, normas, sistemas, procedimientos e instructivos recibidos de las unidades administrativas centrales de la Secretaría;
- IX. Establecer y evaluar la ejecución de los programas sustantivos y de mejoramiento administrativo de la Delegación, y
- X. Los demás que el Delegado considere oportuno tratar.

Artículo 29. En el seno del Comité Interno de Administración Delegacional, existirá amplia libertad de participación y opinión, sujetando las reuniones a un orden del día y a la formalización del acta en que se tome nota de los asuntos tratados, de las conclusiones obtenidas y de los acuerdos.

El Delegado hará del conocimiento del Secretario, a través de la Coordinación General de Delegaciones, los asuntos relevantes tratados en las reuniones, los problemas operativos existentes y las sugerencias concretas para su resolución.

Artículo 30. La Coordinación General de Delegaciones, de acuerdo con sus atribuciones, vigilará la

estricta aplicación de las disposiciones estructurales y funcionales contenidas en el presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

Primero. Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo entrarán en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, dejando sin efectos las disposiciones que se le opongan.

Segundo. Las unidades administrativas a que se refiere el presente Acuerdo y que tienen competencia en asuntos que anteriormente correspondían a otra unidad, se harán cargo de los mismos, terminarán su sustanciación y prepararán las resoluciones que correspondan.

Tercero. La Oficialía Mayor de la Secretaría, de acuerdo con las necesidades del servicio, realizará las gestiones conducentes a la asignación del personal, así como de los recursos materiales y financieros que requieran las Delegaciones Regionales para su adecuado funcionamiento conforme a los programas de actividades autorizados por las unidades administrativas centrales. El personal, con motivo de su asignación a las Delegaciones, no resultará afectado en los derechos que conforme a la ley le correspondan.

Cuarto. El archivo, mobiliario y, en general, el equipo que hayan utilizado las unidades que a continuación se señalan, pasarán a formar parte de las Delegaciones a que este Acuerdo se refiere, a partir de la fecha de su vigencia:

- I. Las representaciones estatales de la Secretaría de Programación y Presupuesto;
- II. Las delegaciones regionales de la Subsecretaría de Presupuesto;
- III. Las delegaciones y representaciones regionales, estatales y de aduanas de la Dirección General de Estadística, y
- IV. Las agencias de la Dirección General de Estudios del Territorio Nacional.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y ocho. El Secretario, Ricardo García Sáinz.— Rúbrica.

MODELO DE CONVENIO UNICO DE COORDINACION

CONVENIO UNICO DE COORDINACION QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE

CONSIDERANDO

1. Que la estructura política del Estado Mexicano, establecida en su Constitución, es la de una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, unidos en una Federación;

2. Que para lograr los objetivos básicos de la planeación global del desarrollo, de fortalecer la independencia nacional, mantener un crecimiento alto y sostenido con una mayor generación de empleo, proveyendo mínimos de bienestar a todos los mexicanos y mejorar la distribución del ingreso entre individuos, grupos y regiones, es necesario ampliar la participación de los Estados en la definición de las prioridades regionales, la planeación del desarrollo nacional y la ejecución directa de programas de gobierno, conforme al espíritu del Pacto Federal;

3. Que el verdadero desarrollo del país consiste en el desenvolvimiento armónico de todos los miembros de la comunidad, en la distribución equitativa de los beneficios entre los diversos sectores de la economía y en el crecimiento equilibrado de las distintas regiones del país;

4. Que es conveniente consolidar la participación de los distintos grupos sociales que forman la comunidad nacional, tanto en el planteamiento y análisis, como en la resolución de los problemas locales que a ellos afectan en forma más directa, para lo cual se debe propiciar un mayor acercamiento entre gobernantes y gobernados, a los niveles federal, estatal y municipal;

5. Que los Estados constituyen las entidades históricamente idóneas para dirigir los esfuerzos de sus comunidades en la consecución del mejoramiento de las condiciones de vida, y para coadyuvar con la Fede-

ración en la planeación y organización del desarrollo armónico y equilibrado del país;

6. Que en virtud de que el Municipio Libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados y es preciso fortalecer su participación en la planeación y ejecución de los programas de gobierno;

7. Que los Ejecutivos Federal y Estatal han formulado planes de desarrollo económico y social, en los cuales se fijan objetivos y metas de desarrollo nacional y regional y los medios para alcanzarlos en los distintos sectores de actividad;

8. Que es necesario integrar y ampliar los programas de desarrollo de los diversos sectores, con el objeto de que los beneficios alcancen a la totalidad de la población y se incremente la productividad, cubriendo áreas que requieran de atención complementaria para elevar los niveles generales de vida,

9. Que en cumplimiento de las responsabilidades que les corresponden a los Gobiernos Federal y Estatal, es imprescindible elevar los niveles de eficiencia en la realización de obras, en la prestación de servicios públicos y, en general, en el desempeño de las acciones de gobierno que constituyen la base del mejoramiento de la colectividad;

10. Que en el marco de la Reforma Administrativa, los Ejecutivos Federal y Estatal realizan esfuerzos, en sus respectivos ámbitos de competencia, para impulsar la coordinación y congruencia de la acción de sus dependencias y entidades;

11. Que en cumplimiento de propósitos comunes, es preciso incorporar al Convenio Unico de Coordinación los compromisos sobre materias específicas, establecidas entre los Ejecutivos Federal y Estatal;

12. Que los resultados de las acciones desarrolladas en virtud del Convenio Unico de Coordinación, se reflejan en el incremento de la capacidad administrativa, financiera y técnica del Estado, y que es preciso ampliarlos y consolidarlos a fin de alcanzar el objetivo de convertirlo en un Convenio para el Desarrollo;

13. Que los Comités Promotres del Desarrollo Socioeconómico, establecidos en todos y cada uno de los Estados de la República, son organismos públicos dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, que tienen como finalidad asesorar y coadyuvar en la

planificación y programación a nivel local, con la colaboración de los diversos sectores de la comunidad;

14. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a celebrar convenios con los Gobernadores de los Estados, para la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras o la realización de cualquier otro propósito de beneficio colectivo, a fin de mejorar los servicios, abatir costos o favorecer el desarrollo económico y social de las propias Entidades Federativas.

Las partes celebran el presente Convenio conforme a las siguientes

C L A U S U L A S

CAPITULO I

De los fines del convenio

Primera. El presente Convenio tiene por objeto coordinar las acciones de los Ejecutivos Federal y Estatal para la realización de programas de desarrollo socioeconómico, que incluyen la ejecución de obras, la prestación de servicios públicos y, en general, las actividades que les competen de manera concurrente, así como aquellas de interés común.

Las partes aceptan las bases y los procedimientos generales de las acciones que se derivan del presente Convenio, y que señalan de manera específica la forma y términos de llevarlas a cabo.

Segunda. Los programas de desarrollo socioeconómico, materia de este Convenio, se enmarcan dentro de la estructura sectorial administrativa definida para la Administración Pública Federal. Así, se podrán concertar acciones para la realización de programas en los sectores administrativos coordinados por las siguientes dependencias:

- Secretaría de Gobernación
- Secretaría de Relaciones Exteriores
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público
- Secretaría de Programación y Presupuesto

- Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial
- Secretaría de Comercio
- Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes
- Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas
- Secretaría de Educación Pública
- Secretaría de Salubridad y Asistencia
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social
- Secretaría de la Reforma Agraria
- Secretaría de Turismo
- Departamento de Pesca

Tercera. Los programas de desarrollo socioeconómico, materia de este Convenio, serán de tres tipos:

I. Programas Estatales de Inversión. Son los programas federales de inversión descentralizados a los Gobiernos Estatales, para cuya ejecución el Gobierno Federal transfiere recursos financieros. Su normatividad técnica queda a cargo de las dependencias y entidades federales, originalmente responsables de los mismos. Estos programas son:

- Agua Potable y Alcantarillado Rurales
- Obras en Cabeceras Municipales
- Mejoramiento de la Vivienda y Espacios Públicos
- Construcción y Rehabilitación de la Vivienda Popular
- Casas de Cultura
- Instalaciones Deportivas
- Cárceles y Penitenciarías
- Caminos de Mano de Obra
- Caminos Vecinales
- Carreteras Estatales
- Carreteras Urbanas
- Aeropistas
- Construcción y Reparación de todo Tipo de Planteles Escolares

- Construcción y Reparación de Centros y Casas de Salud y Asistenciales
- Estudios de Preinversión
- Los demás que se convengan bajo esta modalidad

Para la realización de estos programas, se observarán las normas y lineamientos establecidos en el Manual de Operación respectivo, mismo que se anexa, en el cual se definen responsabilidades básicas de las partes en materia de ejecución, supervisión y evaluación.

Los programas convenidos bajo esta modalidad se incorporan al presente Convenio como Anexos Técnicos y se formularán anualmente.

II. Programas Sectoriales Concertados. Son aquellos que implican acciones en uno o varios sectores, y en los cuales se podrán incluir compromisos específicos, derivados de las atribuciones correspondientes a los sectores de la Administración Pública Federal, mismos que se concertarán bajo la modalidad de Acuerdos de Coordinación.

III. Programas de Desarrollo Estatal. Son aquellos que integran acciones y recursos de los sectores público, social y privado, bajo la forma de Proyectos Prioritarios de Desarrollo Estatal, con el objeto de impulsar productos, regiones y sectores estratégicos.

Los Proyectos Prioritarios de Desarrollo Estatal serán formulados por el Comité Promotor del Desarrollo Socioeconómico del Estado, especificándose los objetivos, metas y beneficios que se persigan, las acciones a realizar y las entidades propuestas para llevarlas a cabo, así como los recursos necesarios y la forma de su financiamiento, conforme a los lineamientos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto.

El Gobierno del Estado propondrá los proyectos formulados al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Cuarta. Los Ejecutivos Federal y Estatal realizarán los programas a que se refiere la Cláusula anterior, para lo cual se comprometen a cumplir con todas las obligaciones que emanen del presente, ejecutar las acciones que del mismo se deriven y, en su caso, promover las iniciativas de ley o decreto, expedir las disposiciones reglamentarias y adoptar las resoluciones administrativas que sean necesarias para que las diversas dependen-

cias y entidades del ámbito federal y local, ajusten su actuación, en lo conducente, a los términos de este Convenio.

Quinta. El Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, con el propósito de promover el desarrollo autosostenido de las comunidades rurales, coordinarán sus acciones conforme a las normas y lineamientos establecidos para el Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDER).

Sexta. El Gobierno del Estado apoyará la ejecución de los programas integrados que conforme al sistema de colaboración programática de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados de la Presidencia de la República (COPLAMAR), apruebe el Comité Promotor del Desarrollo Socioeconómico de la Entidad. Los recursos asignados por virtud de este Convenio a proyectos localizados en zonas COPLAMAR, son intransferibles.

Séptima. Las partes convienen en apoyar las acciones de promoción social que el Patronato Nacional de Promotores Voluntarios realice en coordinación con las instituciones afines de la Entidad, con objeto de propiciar la atención de servicios socialmente útiles y necesarios y la cooperación entre particulares para trabajos que redunden en provecho social.

CAPITULO II

Del procedimiento de planeación y programación

Octava. Las partes convienen en consolidar y ampliar las bases de coordinación necesarias para que los objetivos definidos en el Plan de Desarrollo del Estado sean considerados en el Plan Global de Desarrollo y en los planes sectoriales, y se asegure la congruencia de los programas de ambos órdenes de gobierno, conforme a los siguientes términos:

I. El Ejecutivo Estatal se compromete a:

- 1) Determinar las prioridades sectoriales y las correspondientes a cada una de las subregiones económicas en que está dividido el Estado, a corto, mediano y largo plazo;
- 2) Facilitar a la Federación información relativa a su situación socioeconómica, administrativa

y financiera, con objeto de lograr una mejor identificación de las prioridades locales;

- 3) Presentar anualmente a la Secretaría de Programación y Presupuesto las propuestas de programas de inversión, gasto y financiamiento, correspondientes al Sector Público Federal, que se formulen en el seno del Comité Promotor del Desarrollo Socioeconómico del Estado, conforme a los lineamientos establecidos;
- 4) Facilitar a la Secretaría de Programación y Presupuesto los programas de desarrollo económico y social del Estado.

II. El Ejecutivo Federal se compromete a:

- 1) Considerar las bases del desarrollo estatal para formular los planes nacionales y los programas de inversión, gasto y financiamiento;
- 2) Determinar, por conducto de sus dependencias y entidades, las obras y servicios públicos de interés local, cuya realización pueda ser materia de convenio con el Gobierno del Estado;
- 3) Mantener informado al Gobierno Estatal sobre los lineamientos nacionales de política económica y los objetivos y metas sectoriales y regionales que se establezcan;
- 4) Mantener informado al Gobierno Estatal sobre las acciones de sus dependencias y entidades en el Estado.

CAPITULO III

De las obras y servicios públicos

Novena. La ejecución de las obras y la prestación de los servicios públicos contenidos en los programas a que se refiere este Convenio, podrán realizarse, total o parcialmente, con fondos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, mediante cualquiera de las siguientes formas:

I. Con las transferencias de fondos que acuerde el Ejecutivo Federal, y las que se autoricen a las entidades de la Administración Pública Federal Paraestatal; y

II. Por encargo del Gobierno Federal, o de las entidades de la Administración Pública Federal Paraestatal, en cuyo caso los proyectos estarán contenidos en los programas de inversión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que correspondan, con el señalamiento expreso de las modalidades que, para su realización se convengan con el Gobierno del Estado conforme a este Convenio.

Décima. El Ejecutivo Federal, de acuerdo con el procedimiento establecido, a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, hará la transferencia de fondos al Gobierno del Estado, para que éste ejecute los Programas Estatales de Inversión convenidos, de conformidad con el calendario de ministración que al respecto se hubiere aprobado.

Por lo que hace a los Programas Sectoriales Concertados y a los Programas de Desarrollo Estatal, se establecerán de común acuerdo entre las partes los mecanismos de coordinación y de asignación de recursos que aseguren su adecuada ejecución.

Decimaprimera. Para la ejecución de las obras y la prestación de los servicios públicos que queden a cargo del Gobierno del Estado, las partes podrán convenir que éste aproveche, en su caso, los recursos humanos y técnicos de las dependencias y entidades federales destinados a estos fines, respetando los derechos de los trabajadores, con apego a las leyes aplicables;

Decimasegunda. Con el objeto de contribuir al fortalecimiento de la capacidad estatal para la realización de obras y la prestación de servicios públicos, el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal podrán proponer un plan de incorporación de algunos de los recursos materiales con que cuentan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la Entidad, susceptibles de aprovechamiento por parte del Gobierno del Estado.

Las propuestas deberán ser presentadas a la Secretaría de Programación y Presupuesto, quien previa consulta con las partes y salvaguardando los derechos de terceros, procederá a realizar las gestiones conducentes.

Decimatercera. El Ejecutivo Federal dispondrá que las dependencias y entidades federales presten su asesoría y apoyo material posible, cuando se justifique y así lo solicite el Gobierno del Estado.

Decimacuarta. Los programas a que se refiere la fracción I de la Cláusula Novena, están sujetos a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las transferencias de fondos que concede la Federación.

Los programas a que se refiere la fracción II de la Cláusula Novena, están sujetos a las disposiciones legales y reglamentarias que establecen las bases y normas generales de contratación y ejecución de obras públicas, así como a los demás ordenamientos aplicables en la materia.

Decimaquinta. El Ejecutivo Federal dictará, en su curso, las medidas de índole administrativa que sean procedentes para que las dependencias y entidades federales ejerzan sus respectivas funciones de manera expedita, a fin de que, al mismo tiempo que se salvaguarda el interés público, no se entorpezca la realización de las obras y la prestación de servicios públicos que queden a cargo del Gobierno del Estado.

Decimasexta. El Ejecutivo Estatal realizará las labores de promoción social y económica en los diversos sectores de la población, para lograr su participación en la programación y ejecución de los proyectos, así como el mejor aprovechamiento y utilización de las obras y servicios públicos a que se refiere este Convenio. Asimismo, promoverá la participación de los Municipios, a fin de coordinar sus acciones para la consecución de este propósito.

Decimaséptima. El Gobierno del Estado llevará a cabo la conservación, mantenimiento y operación de las obras públicas a que se refiere la fracción I de la Cláusula Tercera.

En caso de que esta responsabilidad sea incompatible con las atribuciones del Estado o con sus posibilidades presupuestales, las partes, de común acuerdo, determinarán la forma de cumplir con dicho compromiso.

CAPITULO IV

De los acuerdos de coordinación

Decimoctava. Las partes convienen en que se mantengan vigentes los compromisos específicos que actualmente tiene concertados el Gobierno del Estado con las diversas dependencias y entidades de la Admi-

nistración Pública Federal. Para dicho efecto, tales compromisos y los que se celebren en lo futuro, deberán formar parte del presente instrumento bajo la denominación de Acuerdos de Coordinación. La Secretaría de Programación y Presupuesto, con base en los lineamientos que se establezcan, dictaminará sobre la procedencia de su incorporación para los fines que se señalan con anterioridad.

Decimanovena. Los Acuerdos de Coordinación para la realización de los Programas Sectoriales Concertados a que se refiere la fracción II de la Cláusula Tercera, podrán tener la vigencia que demande la naturaleza de dichos programas.

Los Programas Sectoriales Concertados tendrán la cobertura que se derive de las cláusulas que por sector administrativo se definen en este Capítulo.

Vigesima. El Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, conforme a las disposiciones legales vigentes, llevarán a cabo la elaboración y realización conjunta de programas para vigilar el respeto de los preceptos constitucionales en materia de garantías individuales; fomentar el desarrollo político y auxiliar en las funciones electorales, organizar la defensa y prevención social contra la delincuencia, así como el tratamiento de adultos delincuentes, de alienados que hayan incurrido en conductas antisociales y de menores infractores; coordinar las acciones de sus respectivas dependencias, así como de los sectores privado y social, para la realización de labores de auxilio en casos de desastre; fortalecer el sistema de comunicación social, mediante la aplicación de las normas legales en materia de Radio, Televisión y Cinematografía y la extensión del Sistema de Televisión Rural de México; ampliar la distribución del Diario Oficial de la Federación y brindar asesoría a las publicaciones similares de carácter estatal; establecer y operar un Sistema Nacional de Archivo; mediante la coordinación y asesoría del Archivo General de la Nación; dar a conocer y aplicar a nivel regional la política demográfica del Gobierno Federal.

Vigesimaprimera. Los Ejecutivos Federal y Estatal, en el marco de las disposiciones legales correspondientes, convienen en coordinarse en materia de expedición y refrendo de pasaportes, bajo las modalidades de desconcentración administrativa que se acuerden mutuamente.

Vigesimasegunda. El Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal regularán sus relaciones fiscales en los términos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el objeto de coadyuvar a una mejor distribución de recursos fiscales entre la Federación, el Estado y sus Municipios; evitar la superposición de gravámenes federales, estatales y municipales; fortalecer las haciendas públicas del Estado y sus Municipios; desarrollar e intensificar la colaboración administrativa en materia fiscal y mejorar el oportuno cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

El Ejecutivo Federal conjuntamente con el Ejecutivo Estatal, promoverán todas aquellas acciones que permitan integrar una política financiera y hacendaria que estimule el desarrollo de las actividades productivas dentro del Estado.

Igualmente convienen en desarrollar los mecanismos de naturaleza fiscal, crediticia y de estímulos fiscales, así como los programas de las instituciones nacionales de crédito y los fondos y fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal, que fomenten el desarrollo de las actividades productivas dentro del Estado con un claro sentido regional. En lo que se refiere a estímulos fiscales, sólo los otorgará la Federación con cargo a sus propios recursos.

Vigesimatercera. El Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, conforme a las disposiciones legales vigentes, convienen en realizar acciones conjuntas, a fin de impulsar y apoyar los esfuerzos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, que se realizan en el Comité Promotor del Desarrollo Socioeconómico del Estado. Asimismo, impulsarán el diseño y operación de los sistemas de información necesarios para la adecuada toma de decisiones en sus respectivos ámbitos de competencia.

Vigesimacuarta. El Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, conforme a las disposiciones legales vigentes, llevarán a cabo la elaboración y realización conjunta de programas para vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales sobre los bienes de propiedad originaria de la Nación, los de propiedad privada y el uso, explotación y conservación de los bienes nacionales; proteger y fomentar la industria en todas las ramas de actividad, así como la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las

industrias familiares; impulsar el desarrollo tecnológico de la industria nacional y vigilar el cumplimiento de las normas y especificaciones industriales.

Vigesimaquinta. El Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, conforme a las disposiciones legales vigentes, coordinarán sus acciones en materia comercial, con los objetivos de organizar una estructura para el abasto popular, lograr que las actividades comerciales estimulen la producción básica y la capacidad productiva nacional, desarrollar los patrones de consumo necesarios y contribuir al mejor uso de las divisas disponibles, estimulando la autosuficiencia alimentaria, la diversificación de exportaciones, la importación socialmente necesaria y la generación de empleos.

Vigesimasexta. El Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, conforme a las disposiciones legales vigentes, llevarán a cabo la elaboración y realización conjunta de programas para planear y fomentar la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola y forestal, en todos sus aspectos; promover la aplicación de las normas y procedimientos que permitan aumentar los rendimientos de dichas actividades, impulsar las labores de investigación y capacitación en estos campos y, en general, para llevar a cabo todas aquellas acciones que permitan la adecuada evolución de la producción agropecuaria y forestal en la Entidad.

Vigesimaséptima. El Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal coordinarán sus acciones, a fin de que exista congruencia entre los planes nacionales y estatal, que se formulen en materia de comunicaciones y transportes. Asimismo, el Ejecutivo Estatal coadyuvará con el Ejecutivo Federal en la vigilancia de la conservación de las líneas e instalaciones telefónicas incorporadas a la red nacional, que se establezcan en la Entidad, y coordinarán sus acciones para establecer el enlace de la red nacional de telecomunicaciones con los servicios similares en la Entidad.

Vigesimaoctava. El Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, conforme a las disposiciones legales vigentes, coordinarán sus acciones con objeto de dar plena operatividad al Sistema Nacional de Planeación del Desarrollo Urbano. Con este fin, convienen en coordinar sus acciones para la aplicación del Plan Nacional

de Desarrollo Urbano, de sus programas operativos y del Programa Nacional de Vivienda; para la formulación, ejecución, evaluación y actualización de los planes y programas estatales de desarrollo urbano y para promover y apoyar la elaboración, ejecución, evaluación y actualización de los planes de desarrollo urbano municipales y de centros de población.

Trigesimanovena. El Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, en atención a las disposiciones legales relativas, llevará a cabo la elaboración y realización conjunta de programas para aminorar el rezago y promover las oportunidades de educación, impulsar la capacidad en y para el trabajo, elevar el nivel cultural, ofrecer oportunidades de recreación y, en general, llevar a cabo acciones en estas materias, que tiendan a mejorar el bienestar de la población.

Trigésima. El Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, conforme a las disposiciones legales vigentes, llevarán a cabo la elaboración y realización conjunta de programas para crear y administrar establecimientos de salubridad, asistencia pública y terapia social; lograr la planeación y ordenación ecológica del territorio y el ambiente físico de los asentamientos humanos y conservar la salud de la población en general.

Trigesimaprimera. El Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, conforme a las disposiciones legales, vigentes, llevarán a cabo la elaboración y realización conjunta de programas para promover las oportunidades de empleo; elevar la productividad; impulsar y vigilar la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo; promover la seguridad e higiene en el trabajo; procurar una justicia expedita en las relaciones laborales y, en general, para llevar a cabo acciones que tiendan a mejorar el nivel de vida de los trabajadores.

Trigesimasegunda. Los Ejecutivos Federal y Estatal, conforme a las disposiciones legales vigentes, llevarán a cabo la elaboración y realización conjunta de programas para vigilar el cumplimiento de las leyes agrarias; promover la conservación de tierras y aguas en ejidos y comunidades; promover la organización y capacitación de los integrantes de los núcleos ejidales y comunales; fomentar el desarrollo de la industria rural ejidal; regularizar zonas urbanas ejidales y comunales que necesitan de la acción conjunta Federación-Estado Municipio y, en general, aquellas acciones que tiendan

a elevar el nivel de vida de los habitantes de los ejidos y de las comunidades rurales.

Trigesimatercera. El Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, conforme a las disposiciones legales vigentes, convienen en realizar acciones conjuntas, a fin de consolidar el Sistema Nacional de Planificación Turística en la Entidad; promover el incremento y diversificación de los mercados turísticos; auspiciar el desarrollo del turismo social y proteger los consumos turísticos populares.

Trigesimacuarta. El Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, formularán y ejecutarán, conjuntamente, programas en materia de captura, acuacultura, industrialización y comercialización pesquera, desarrollo de comunidades pesqueras, investigación científica y tecnológica, organización del trabajo, capacitación de pescadores y, en general, todas aquellas acciones de fomento pesquero que tiendan a incrementar la producción y el abasto de alimentos, generar empleos, mejorar el nivel de vida de los pescadores, obtener divisas e impulsar el desarrollo regional y el de otras actividades relacionadas con la pesquera, así como vigilar la correcta aplicación de las disposiciones legales establecidas en la materia.

CAPITULO V

De la Reforma Administrativa

Trigesimaquinta. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Coordinación General de Estudios Administrativos, pondrá a disposición del Ejecutivo Estatal los estudios de reforma administrativa con que cuenta el Gobierno Federal y prestará la asesoría que al efecto solicite el Estado.

Trigesimasexta. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, a petición del Ejecutivo Estatal, tomando en cuenta la opinión de la dependencia coordinadora del sector correspondiente y de la Coordinación General de Estudios Administrativos, estudiará y resolverá sobre la transferencia al régimen estatal de determinadas funciones que están a cargo de entidades de la Administración Pública Federal Paraestatal, así como su participación en las mismas, cuando sean de interés exclusi-